

Capítulo IV

Memoria democrática

4.1. Argentina

Asunción del presidente Néstor Kirchner (mayo de 2003)

“No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y de la exclusión de los argentinos”. Ésta fue una de las frases más aplaudidas durante el discurso de toma de posesión del presidente Kirchner, el 25 de mayo de 2003. Su primera alocución como presidente estuvo cargada de referencias a la década del 90. “Sabemos a dónde vamos y también sabemos a dónde no queremos ir ni volver”, dijo el nuevo mandatario en referencia al modelo económico impulsado el ex presidente Carlos Menem. Prometió impulsar un modelo económico basado en un fuerte capitalismo nacional y en mejorar el consumo interno. “Los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas”, dijo.

Gestión del presidente Kirchner en 2004

En lo político, Kirchner comenzó buscando competir o desafiar al PJ con su proyecto de “transversalidad”, pero en los últimos meses decidió volver al peronismo y eso disminuía el riesgo de que se produjera una crisis de gobernabilidad. En lo institucional mostró poca prioridad por el tema, como lo muestran el cambio en la Presidencia del Banco Central, la búsqueda de los superpoderes y el uso de los decretos de necesidad y urgencia.

El tema más crítico que enfrentó Kirchner fue la creciente inseguridad pública, frente a la cual el gobierno no pareció tener una respuesta eficaz ni una política de largo plazo.

Renovación de la Corte Suprema

A inicios de la gestión del presidente Kirchner, el enjuiciamiento de varios miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su posterior reemplazo fue una de las medidas de mayor impacto. La renovación de la CSJ, compuesta por nueve miembros, fue desde el principio de su mandato una de las prioridades del presidente Kirchner, quien en diferentes ocasiones manifestó que la justicia argentina necesitaba librarse del peso de la injerencia política.

Por 40 votos a 18, el Senado votó la suspensión del ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor y el penalista Eugenio Zaffaroni consiguió ser aprobado

como juez del alto tribunal. Al tiempo que asumía el nuevo magistrado, se producían nuevas vacantes. Fayt declaraba que se iba en diciembre. Las mujeres ingresan a la Corte Suprema con la designación de Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.

El presidente Kirchner, que había asumido el poder con sólo el 22 % de los votos, ya había relevado a la cúpula de las Fuerzas Armadas y a varios comisarios de la Policía Federal, en dos jugadas con las que intentó demostrar autoridad y avanzar con el proceso de renovación que impulsaba en todas las instituciones.

Cambio de tctica

Durante 2004, la gestión del presidente Kirchner había caído del 60 % de imagen positiva en diciembre, al 40 % en mayo, cuando cumplió un año al frente del gobierno. El fuerte desgaste era producto de dos cuestiones: la persistencia de problemas en la gestión y el conflicto político inducido desde el propio oficialismo. El gobierno modificó cuestiones en esos dos aspectos. Dejó la confrontación como política permanente sellando la paz con el ex presidente Eduardo Duhalde, bajando el perfil del propio Presidente y de sus voceros habituales, administrando el discurso con inteligencia. Cambió de actitud con respecto a los piqueteros, hizo cambios en seguridad, aumentó las jubilaciones, subió el salario mínimo. Resultado de todo esto: creció la aprobación de la política económica, de la negociación de la deuda, subió la adhesión de gente que estaba en desacuerdo con que el Presidente se peleara todo el tiempo, se recuperó la imagen de los ministros y mejoraron las expectativas sobre el futuro personal (aunque no sobre el país).

Pol tica econ mica

Los números de la economía ayudaron a endulzar la luna de miel de buena parte de la opinión pública con el presidente. La expansión económica prosiguió a un ritmo acelerado en 2004, con un alza del PIB del 9 %. Aun con este avance, el PIB se ubicó por debajo de los niveles de fines de 2001. Aunque la intensa recuperación estuvo asociada a un apreciable incremento del consumo, también aumentó la relación entre el ahorro interno y el PIB, que superó ampliamente los registros de la década anterior. En 2004, la inversión fija creció cerca de un 35 %, lo que permitió una recuperación de la tasa de formación de capital, que ascendió al 17,7 % (19 % en el cuarto trimestre).

La expansión de la actividad trajo aparejada nuevamente una significativa creación de empleos, aunque muchos de ellos fueron de naturaleza informal. Paralelamente, volvió a reducirse la tasa de desempleo, que de todos modos sigue siendo alta.

La recaudación de impuestos nacionales volvió a elevarse considerablemente y ascendió al 22 % del PIB, porcentaje que representa un máximo histórico. Los

mayores ingresos facilitaron la fluidez de la gestión fiscal y permitieron acumular un superávit primario del sector público nacional cercano al 4 % del PIB, el mayor de varias décadas. Por su parte, el gobierno formuló una propuesta de canje de deuda, basada en el trato de los organismos multilaterales como acreedores no sujetos a quitas de capital o intereses y la determinación de un flujo de compromisos de pago por servicios compatible con superávits primarios del gobierno del orden del 3 % del PIB.

Los grandes problemas pendientes, como la reestructuración de la deuda, la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, las tarifas de los servicios públicos y las nuevas reglas para el sistema financiero permanecían en un cono de sombras, excepto el particular acuerdo con el FMI que le brindó al gobierno una virtual tregua de un año para comenzar a resolverlos y enfrentarse con los acreedores internos y externos.

Hacia las elecciones legislativas (octubre de 2005)

La elección legislativa de 2005 comenzó a dominar el escenario político argentino. La administración Kirchner analizó la anulación del decreto firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde que permitió a los gobernadores fijar la fecha de elección de los legisladores nacionales. Por lo general, ha sido el Ejecutivo el que ha determinado esta fecha, por lo que realizaron en todo el país el mismo día, para así nacionalizar la elección a su favor. El ex Presidente optó por escalonar las elecciones, de manera que los legisladores nacionales fueran electos junto con los gobernadores –como efectivamente sucedió en el segundo semestre de 2003– y no junto con el Presidente. Fue una estrategia hábil, que impidió que los legisladores nacionales electos respondieran a los candidatos a Presidente.

La próxima elección muestra un cuadro de atomización en la oposición que no tiene antecedentes en la historia argentina. La crisis de la UCR –en la elección presidencial de 2003 no llegó al 3 % de los votos– dio por tierra con el tradicional bipartidismo argentino.

Política exterior

La crisis política de Bolivia puso en el tapete el control del subcontinente y las disputas de liderazgo entre Brasil y Argentina. El gobierno argentino no se pronunció claramente sobre declaraciones hechas por líderes de la oposición con respecto al quiebre institucional de la democracia en Bolivia.

Luego de la crisis boliviana y para limar asperezas, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, visitó Argentina. Preocupados en demostrar que habían superado las diferencias, Kirchner y Lula se mostraron como aliados, ratificando la alianza estratégica entre ambos países. En el encuentro se sentaron las bases de la puesta en marcha del tribunal de resolución de controversias en el Mercosur, que arbitraría en los conflictos comerciales entre los países del bloque. Ambos presidentes

ratificaron que encararían desde el bloque regional la negociación con los Estados Unidos por el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), continuando el reclamo sobre la eliminación de los subsidios de ese país y de la Unión Europea a los productos agropecuarios.

Kirchner comenzó a implementar su estilo personal en política exterior sorprendiendo a propios y extraños: realizó intempestivos cambios de agenda presidencial sin pensar en costos políticos y además, se dejó saber que el Presidente sentía desagrado por concurrir a reuniones diplomáticas porque en ellas imperaba una formalidad sin resultados pragmáticos. Por otra parte, Kirchner rehusó su asistencia a eventos que pudieran comprometer su situación política interna.

4.2. Bolivia

Crisis política: renuncia del Presidente

En 2003, Bolivia atravesó una delicada situación política que en el mes de octubre, tras paros, marchas, bloqueos y violencia social, desembocó en la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y su reemplazo constitucional por su vicepresidente, Carlos Mesa. La crisis se desencadenó a raíz de un proyecto para exportar gas natural a Estados Unidos. Se abrió una nueva agenda política y económica que abarcó la revisión de la normativa del sector de hidrocarburos (reforma de la Ley de Hidrocarburos y referéndum sobre las exportaciones de gas) y aspectos de la estructura política (llamado a una asamblea constituyente).

Apenas asumido, Mesa debió pactar una tregua con los líderes del levantamiento popular, Evo Morales y Felipe Quispe, para lo cual accedió a cambiar la política de erradicación de cultivos de coca (impulsada por los Estados Unidos como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico) en beneficio de los cocaleros. No obstante, a pesar del apoyo de todo el espectro político y del alto nivel de respaldo de la opinión pública, nunca dejó de ser estructuralmente débil la situación política sobre la que se asentaba el Presidente. Y las banderas nacionalistas alrededor de las cuales se aglutinaron los grupos opositores ganaron, cada vez más, un espacio central.

Referéndum (julio de 2004)

El referéndum del 18 de julio fue sin lugar a dudas un paso gigantesco en la historia democrática del país. La convocatoria obtuvo reacciones variadas y eso condujo a una fragmentación del frente opositor; en especial, permitió diferenciar con claridad las actitudes entre líderes como Evo Morales y Felipe Quispe. Por un lado, Morales tomó una postura mesurada y de parcial colaboración, coherente con sus expectativas presidenciales. Estimando que una profundización de la crisis política boliviana podía incluso arrasarse con sus oportunidades electorales, Morales optó por apoyar públicamente la realización del referéndum, aunque se

diferenció del gobierno al apoyar el voto por el “No” en las dos últimas preguntas. En contrapartida, Quispe se opuso a la propuesta y atacó a Evo por su traición.

La oposición llevada a cabo por los sectores más radicales no logró evitar que la consulta se llevara a cabo con relativa normalidad, que arrojó como resultado un fuerte respaldo a la gestión de Mesa, aunque con un alto nivel de abstención (45 %) y un promedio de votos nulos y en blanco superior al habitual. El gobierno obtuvo un resultado positivo en cada una de las cinco preguntas formuladas. El resultado del referéndum le dio aire al gobierno de Mesa para afrontar los siguientes meses, aunque de ninguna forma resolvió los conflictos de fondo.

El referéndum no resolvió los problemas para los cuales había sido convocado. El Congreso Nacional debía aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos en un escenario que seguramente estaría marcado por un conflicto de interpretaciones por las ambigüedades de las preguntas formuladas, que tenían el propósito de establecer los principios de una nueva política de Estado sobre el gas, revocar la ley anterior y reforzar el rol del Estado. Todo ello significaba un viraje respecto de la política privatista de los años ochenta y noventa.

En lo inmediato, el gobierno salió fortalecido con el referéndum y pudo usar un mayor margen de libertad para relacionarse más eficazmente con el Parlamento mediante una cuidadosa ingeniería política de concertación difícil. En este proceso siguió siendo vital la relación del gobierno con el MAS.

Elecciones municipales (5 de diciembre de 2004)

A fines de 2004, el contexto de crisis generalizada que vivía el país convirtió una elección “local” municipal, la séptima directa desde la instauración de la democracia en 1982, en una prueba de valor nacional. Políticamente, lo que estaba en juego era saber hasta qué punto la crisis de octubre de 2003 impactaba sobre la nueva relación de fuerzas.

Esta fue la primera elección local en la que la referencia al gobierno estuvo ausente, pues el gobierno no sólo no tuvo candidatos oficiales sino que, además, era un gobierno sin partidos. Los referentes contextuales del voto fueron la crisis generalizada en el país, la crisis política y de representación y las “agrupaciones ciudadanas” (ACs) y “pueblos indígenas”(PIs), cuya novedad quizá contribuyó decididamente a elevar la participación electoral.

Dentro de las reformas constitucionales que se produjeron en febrero de 2004, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas fueron reconocidos como equivalentes funcionales de los partidos, con iguales requisitos de constitución y funcionamiento. Esta liberación de la representación política provocó inicialmente una explosión de ACs y PIs, que en cantidad superior a las 900 agrupaciones expresaron su propósito inicial de participar en el proceso electoral. Al final participaron 341 ACs y 63 PIs, junto a 17 partidos políticos.

El proceso electoral fue corto, de apenas un mes, lo que perjudicó a las agrupaciones ciudadanas recién conformadas. Como podía esperarse por la situación

del país, la agenda electoral dominante fue una mezcla de temas nacionales y temas estrictamente locales.

El déficit o ausencia de propuestas elaboradas y de planes de “gobierno municipal” hizo que muchos candidatos, amparándose en la idea de promover la “participación popular”, aseguraran que lo que harían como alcaldes sería lo que lo pidieran los “vecinos”, transfiriendo sobre los votantes una responsabilidad propia de los que buscaban ser elegidos.

Una primera constatación del proceso electoral fue el hundimiento electoral de los que aún quedaban en pie como partidos “tradicionales”. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) pagaron la factura pendiente de “octubre” de 2003 con la pérdida la mitad de los votos nacionales obtenidos en las elecciones municipales de 1999 y más de la mitad en las diez ciudades más importantes del país.

A esta derrota debió sumarse otra, la de Nueva Fuerza Republicana (NFR), partido de centro derecha, que tuvo una declinación ostensible, expresada en su bastión de Cochabamba, donde logró menos del 10 % de la votación, cuando en elecciones municipales anteriores había ganado con más del 50 %.

Sin embargo, esta recomposición de fuerzas, más que producir un nuevo mapa político, dejó vacíos de representación, pues los partidos desplazados, pivotes durante años, no fueron reemplazados por otros. Lo que empezó a existir fue un escenario político nacional con fuerte fragmentación política, sin partidos nacionales, excepto el Movimiento al Socialismo (MAS). El MAS fue el “partido” ganador con atenuantes, y se convirtió en la primera fuerza política del país. Aunque saltó del 3 % en 1999 a más del 20 % en 2004, sus resultados fueron inferiores respecto de sus expectativas y potencialidades dada la crisis del país y la de los partidos “tradicionales”.

Los que ganaron fueron los “líderes” regionales que se postularon a su reelección pero que tuvieron que abandonar los partidos que los habían hecho alcaldes en 1999, para convertirse en cabezas de ACs. El que ganó indirectamente fue el gobierno, pues el debilitamiento mayor de los partidos “tradicionales”, no muy afectos al Poder Ejecutivo, debilitaba también el Parlamento, con quien sus relaciones estaban crispadas desde hacía varios meses.

Política económica

En 2004, la economía tuvo un buen desempeño gracias al impulso de una favorable coyuntura externa y a una cierta, aunque precaria, estabilidad política y social.

En 2004, el PIB se expandió a una tasa del 3,6 % (2,8 % en 2003), crecimiento que si bien se tradujo en un aumento del producto per cápita superior al del año anterior, siguió siendo insuficiente para retomar el nivel de 1998, lo que da cuenta de los profundos efectos negativos que ha tenido el período de bajo crecimiento iniciado en 1999. En 2004, el déficit del sector público no financiero se redujo notablemente, hasta llegar a representar un 5,5 % del PIB.

En 2004, sobre todo en la segunda parte del año, se aliviaron ligeramente las marcadas restricciones fiscales y monetarias que afectaban la economía y la situación cambiaría también fue positiva.

El nivel de actividad, la situación fiscal y la cuenta corriente de la balanza de pagos mejoraron en 2004 respecto a 2003. No obstante, el país estaba aún lejos de salir de la fase de bajo crecimiento iniciada en 1998 y de superar las marcadas restricciones en los ámbitos fiscal y monetario.

4.3. Brasil

Denuncias de corrupción

Luego de las denuncias por corrupción iniciadas en febrero de 2003, donde la revista *poca* había difundido imágenes del entonces subsecretario de Asuntos Parlamentarios, Waldomiro Diniz, mientras negociaba comisiones ilegales y donaciones para la campaña electoral con un gran empresario del juego clandestino (Diniz era hombre de confianza de José Dirceu, quien se desempeñaba como jefe del Gabinete y era un amigo íntimo de Lula), el Presidente despidió al asesor buscando acotar daños. Aunque consiguió disciplinar a sus parlamentarios para evitar la formación de una comisión investigadora, la aprobación a la gestión de Lula descendió del 75 % que ostentaba en abril de 2002 a apenas el 38 %.

Elecciones municipales (octubre de 2004)

Las derrotas del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones municipales en San Pablo y Porto Alegre así como en otras importantes ciudades del sur y sudeste del país en las que gobernaba, encendieron una luz de alerta para el gobierno, pero junto con el simultáneo avance en sectores históricamente resistentes a la ideología del PT, generaron dos interpretaciones divergentes dentro del PT sobre la evaluación de estos dos años de gobierno de Lula.

En términos generales, en esas elecciones el PT perdió espacio en los sectores medios, urbanos y educados de ciudades importantes de las regiones sur y sudeste donde ya gobernaba y donde era tradicionalmente fuerte. Por el contrario, avanzó en los barrios pobres de esas ciudades, así como entre gran parte del electorado de los principales centros urbanos del norte y noreste, donde hasta ese momento siempre había tenido mucha dificultad en conseguir votos.

Para los candidatos derrotados, el retroceso del PT se debió a la decepción de gran parte del electorado (fundamentalmente de los sectores medios) con la política económica del gobierno.

La interpretación del gobierno y de la cúpula del PT fue diferente. En el texto aprobado por el Directorio Nacional sobre el resultado electoral de octubre, después de considerar que el gobierno salió fortalecido por haber aumentado el porcentaje de votos y el número de municipios gobernados y de eximir al presidente Lula de

responsabilidad por las derrotas, se dejó en claro que “las motivaciones básicas de la decisión del voto del electorado fueron de naturaleza local: evaluación de las administraciones, perfil de los líderes, propuestas y temas de campaña”.

La tesis del gobierno y de la cúpula petista de que en octubre Lula salió fortalecido se vio respaldada con la difusión de la encuesta CNI/Ibope sobre evaluación de la administración al final de la mitad de su mandato. La franja de la población que consideraba la gestión buena o muy buena aumentó de 38 a 41 % en relación con septiembre y disminuyó también tres puntos, a 16 %, el número de aquellos que la consideraban mala o pésima.

No obstante, también fue explicitada la postura crítica dentro del propio PT, en un documento elaborado por ocho corrientes de la izquierda del partido, titulado “Carta a los petistas”. Allí se alertaba sobre la necesidad del PT de “reafirmar su papel como polo de izquierda de la sociedad brasileña, protagonista de la lucha por el socialismo, por el programa democrático y popular y por los cambios, lo que posibilitó el triunfo en las elecciones de 2002”.

En 2004 ya no se discutía en Brasil sobre cómo resolver una crisis de confianza de los inversores o de recesión, aumento del desempleo o déficit fiscal, sino sobre la necesidad de inversiones en infraestructura para dar continuidad a la reactivación económica, reducir y hacer más eficiente la tributación y, fundamentalmente, cómo ser eficientes en las políticas sociales para reducir los alarmantes indicadores de desigualdad y sus consecuentes problemas sociales.

Política socio-económica

Aunque 2003 fue un año duro para el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que tuvo que consolidar un programa económico que generó críticas y presiones para cambiar el rumbo de su gobierno; los resultados positivos de la conducción económica del gobierno en 2004 fueron, según varios indicadores, incuestionables.

La economía brasileña registró en 2004 su mayor expansión en los últimos 10 años, con un crecimiento de su PBI del 4,9 %. Este resultado se dio en un contexto favorable de la balanza de pagos, al lograr un superávit sin precedentes en la balanza comercial y en la cuenta corriente que permitió mejorar los indicadores del endeudamiento externo. En el plano interno, aumentó el superávit primario fiscal y se redujo el déficit nominal de las cuentas públicas a su menor nivel en décadas, lo que contribuyó a reducir la deuda del sector público. Ante tal evolución de su economía, reflejada en el comportamiento de sus principales indicadores, Brasil no renovó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después de seis años de programas con dicho organismo.

Estas condiciones favorables han propiciado una significativa expansión del empleo, con un incremento de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en el mercado formal y, por primera vez en siete años, una recuperación del salario medio real. La tasa media de desempleo cayó al 11,5 % en 2004, en comparación con el 12,3 % registrado en 2003.

No obstante los buenos indicadores económicos, el salario real, que continuaba deprimido, y los intereses y la carga tributaria sumamente altos persistían como tres temas muy importantes y sensibles para amplios sectores medios de la sociedad.

La insatisfacción era más notoria en aquellos integrantes de la clase media más politizada, autodeclarada de izquierda, integrada por sectores de profesionales y funcionarios públicos y otros grupos sindicalizados que votaban al PT desde hacía años.

Política exterior

La política exterior de Lula dio prioridad a la defensa de la soberanía nacional y al establecimiento de un conjunto de alianzas entre países del Tercer Mundo para encarar una alianza estratégica con unificación de la agenda internacional ante la agenda planteada por Estados Unidos en los foros internacionales. El primer paso fue el establecimiento del G-3, una alianza estratégica y de largo aliento con India y Sudáfrica. El segundo paso fue la creación del G-21, en cuya conformación Brasil jugó un papel decisivo, que contribuyó al descarrilamiento de la Cumbre de la OMC en Cancún.

4.4. Colombia

Presidencia de Álvaro Uribe

Al cumplir el primer año del gobierno en agosto de 2004, Álvaro Uribe gozaba de un 71 % de apoyo popular. Esto motivó que miembros de su bancada en el Congreso presentaran un proyecto de reforma constitucional para abolir la prohibición de la reelección y reemplazarla por la posibilidad de la reelección inmediata a partir de 2006, cuando terminara el cuatrienio de Uribe. Más elocuente aún fue su rápida aprobación en la Cámara de Diputados en primer debate y que las encuestas mostraran que la ciudadanía estuviera a favor de ella en un 63 %.

Las estadísticas de popularidad del presidente se debían a tres razones principales: el estilo de gobierno, el cambio en el ejercicio de la política y, fundamentalmente, los logros del programa de “seguridad democrática”, problema central de la vida política, social y económica del país.

Todo parecía indicar que la administración Uribe enfrentaba serios problemas de gobernabilidad. Uribe fue elegido con el respaldo de una amplia coalición en la que participaron decenas de partidos y movimientos políticos; dicha coalición había perdido unidad y solidez y, por lo tanto, no podía garantizar que los proyectos de la administración tuvieran un curso exitoso en el legislativo.

Pero la efectividad de la gestión gubernamental estaba amenazada también por otro factor, a saber, el creciente activismo judicial desplegado por la Corte Constitucional, que se atribuía facultades supremas en todos los ámbitos del

gobierno. A principios de agosto de 2004, en una muestra de cuán débil era la coalición uribista, el Senado había elegido un nuevo magistrado de la Corte Constitucional que pertenecía a la línea hostil a Uribe y que favorecía el activismo judicial. Con esto, el equilibrio en la Corte se rompió en favor de esta última tendencia.

En agosto de 2004, Álvaro Uribe se reunió con cerca de 150 congresistas para buscar consenso sobre seis temas básicos. Se trataba de las reformas tributaria, de las pensiones, de la salud y de la justicia, de la ley de contratación administrativa y la eliminación de trámites engorrosos. Entre los asistentes estaban representantes de las diferentes vertientes del uribismo y del conservatismo. Uribe inició su exposición presentando un preocupante panorama sobre la situación financiera del país. Para buscar un consenso alrededor de los seis proyectos enunciados se acordó la conformación de igual número de mesas de trabajo, integradas por congresistas de cada una de las vertientes del uribismo y del conservatismo y por delegados del gobierno.

Política de seguridad

El mayor desafío en esta materia fue el lanzamiento del proceso de negociación con los grupos paramilitares.

Existía un proceso de paz paralelo a la “Estrategia de Seguridad Democrática” (Plan Colombia), consistente en el diálogo con los grupos armados que durante el año 2003 no había culminado. El gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que pretendía suspender condicionalmente las penas a los autores de delitos atroces que decidieran renunciar a las armas. A finales de 2003 empezó un desarme de los grupos paramilitares.

Seguía el Plan Colombia, con el objetivo de erradicar los cultivos ilícitos y promover cultivos alternativos con la ayuda principal de Estados Unidos, sobre todo en equipamiento y ayuda militar. También siguió vigente la “Estrategia de Seguridad Democrática” que centraba la política de seguridad en el narcotráfico, justicia, terrorismo, zonas de rehabilitación, cooperación civil y estatuto antiterrorista, entre otros temas.

En la primera mitad de diciembre de 2003 se había aprobado el Estatuto Antiterrorista, lo que provocó que el conflicto y los actores armados se reacomodaron, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. En este contexto se definió el verdadero significado de la desmovilización de los grupos de paramilitares.

A principios de 2004 se produjeron tres episodios de importancia en el tema seguridad.

- En la Cumbre de las Américas de Monterrey, Uribe señaló la necesidad de mantener el Plan Colombia pese a las inquietudes de los países vecinos.
- La visita a la región del comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Chris Patten, provocó choques verbales con el Vicepresidente de Colombia en relación con el cumplimiento o no de las 24 recomendaciones de Londres y a las visiones europeas del proceso, respectivamente. Patten dijo que

la Unión Europea seguiría insistiendo ante la ONU sobre la necesidad de un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados.

- Y por último, la captura de Simón Trinidad en el Ecuador, miembro del Secretariado de las FARC, implicó efectos diversos: redujo la visión sobre la invulnerabilidad de sus miembros, debilitó la posibilidad de un acuerdo humanitario entre las FARC y el gobierno y mostró la cooperación policial y de inteligencia de los países vecinos a pesar de las desavenencias políticas. Asimismo, mostró que la guerrilla y los otros grupos tenían una presencia en la región.

Política exterior

La política exterior de Uribe reflejó el programa prioritario de su gobierno: el fortalecimiento de la seguridad, la confrontación con los grupos guerrilleros y la legitimación del uso de la fuerza. En el plano diplomático, la búsqueda de la “seguridad democrática” definió el discurso, las prioridades, las alianzas y los instrumentos utilizados.

La estrategia internacional del gobierno partió de una estrecha alianza con los Estados Unidos. Se produjo la inserción del conflicto interno colombiano dentro de la cruzada internacional antiterrorista. En consecuencia, los grupos guerrilleros fueron considerados como terroristas (y no como combatientes), lo cual generó efectos para su tratamiento.

Desde el punto de vista temático, el discurso internacional de Uribe estuvo dominado por el problema de la seguridad. Los planteamientos y propuestas formuladas en distintos escenarios se circunscribieron a esta agenda, como se vio con la convocatoria de una cumbre regional sobre seguridad en Bogotá, las propuestas planteadas al Grupo de Río y la OEA para que conminen a la ONU a tomar un papel activo de acorralamiento político de las FARC.

Política económica

Un enemigo potencial de la reputación presidencial podía ser la economía. Mientras la aprobación de la gestión de Uribe alcanzaba niveles superiores al 70 %, la del manejo económico estaba en 48 %.

En 2004, la economía colombiana alcanzó un crecimiento del PIB en términos reales del 4,1 %, cifra similar a la observada en 2003. La inversión privada y las exportaciones fueron los principales impulsos del crecimiento. El desempleo y la inflación se redujeron y las tasas de interés se mantuvieron estables y en niveles bajos. La liquidez y disponibilidad de crédito en el mercado fueron adecuadas. Tras una marcada depreciación entre junio de 2002 y marzo de 2003, el peso se apreció en 2004. El tema fiscal continuó en el centro del debate y el balance público registró una mejoría. Por su parte, el entorno internacional —caracterizado por el dinamismo de la demanda mundial, la recuperación de la República Bolivariana

de Venezuela, el aumento de los precios de los bienes básicos y el ascenso de las entradas de capital— favoreció la actividad económica.

Sin duda, lo que más interés despertó en el panorama de la economía colombiana durante 2004 fue la negociación de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, el cual liberaba al sector productivo de las limitaciones en que lo encerraba el pequeño mercado local.

4.5. Costa Rica

Desafíos para el nuevo gobierno

Renuncias, separaciones, huelgas, la tercera fuerza legislativa partida en dos, diputados que se fueron de su fracción pero volvieron, designación de un diputado como Ministro de la Presidencia porque su antecesora no era reconocida como interlocutora válida entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, el Segundo Vicepresidente de la República estableciendo su oficina dentro de la Asamblea Legislativa, el Defensor de los Habitantes y el obispo de la Iglesia Católica abandonando por 48 horas la mesa de negociaciones en un conflicto sindical. Estas fueron algunas de las situaciones que marcaron la dinámica política del país.

Durante sus primeros meses de gestión, el presidente Pacheco dio un sello propio a la forma en que se venían negociando los proyectos de trascendencia social, con lo que incorporó distintas organizaciones civiles en distintas comisiones de discusión, como en el caso del proyecto de reformas ambientales para ser incorporadas en la Constitución Política y en la representación de sindicatos en la discusión del Plan de Contingencia Fiscal.

En lo que se consideró como una forma de replantear su rumbo, la administración Pacheco tuvo varios cambios en su Gabinete, en el nivel de ministerios y de presidencias ejecutivas de entidades autónomas. Por primera vez en muchos años, un presidente empezaba a tomar distancia de su partido y a tomar figuras “independientes” para su administración. Algunos sectores vieron con pesimismo estas “bajas”, al considerarlas como presiones de sectores económicos o como medidas desesperadas de la administración por mejorar su imagen negativa.

A principios de 2004, el gobierno se vio sorprendido por la inesperada renuncia del ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, considerado como la mano de derecha del Presidente. La renuncia de Toledo se sumó a la del Ministro de Hacienda y el Jefe del equipo económico, que habían renunciado por oponerse a un acuerdo que suscrita por Toledo con sindicatos y grupos sociales que paralizaron el país durante la última semana de agosto por reivindicaciones salariales y contra el monopolio privado de la revisión técnica de vehículos.

Como telón de fondo de la crisis, los sindicatos del sector público, grupos agrícolas y organizaciones sociales anunciaron que podrían volver al bloqueo de carreteras y huelgas por supuesto incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados con Toledo.

El mayor malestar de sectores sociales y sindicales se vio reflejado en el sólido apoyo que el Presidente le había dado a su Consejo Económico, al cual estos

sectores consideraban de corte neoliberal. Sin embargo, el Presidente no dio marcha atrás en considerar las recomendaciones de estos asesores.

Denuncias de corrupción

Los ex mandatarios Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier y José Figueres Olsen se encontraron bajo investigación a cargo de los tribunales respectivos por haber sido sobornados por ALCATEL (empresa de origen francés). El Partido Unidad Social Cristiano (PUSC), al cual pertenecían los dos primeros, y el Partido de Liberación Nacional (PLN), del cual era miembro el tercero, podrían pagar el costo en las elecciones presidenciales de 2006, asestando un golpe político al bipartidismo tradicional en este país.

A comienzos de 2004, Costa Rica se encontró sacudida por denuncias de corrupción que involucraban al ex presidente Rafael Ángel Calderón. Los costarricenses se mostraron sorprendidos cuando la televisión local dio a conocer que una sociedad creada por Calderón en Panamá había recibido 440.000 dólares de comisión por un préstamo de 39,5 millones de dólares otorgado en 2001 a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por Finlandia. Del préstamo, se destinaron a pago de “comisiones” ocho millones de dólares, cuyo destino total era desconocido aunque las autoridades presumían que otros políticos y ex diputados podrían haber recibido parte.

Política económica

Después de un repunte excepcional en el año anterior (6,5 %), en 2004 la economía costarricense creció a un ritmo más moderado, cercano a la tasa de crecimiento tendencial. El producto interno bruto (PIB) real aumentó 4,2 % —4,4 %, si se excluye el sector de alta tecnología—, impulsado por la expansión de las exportaciones (6,8 %) y de los ingresos generados por la industria turística. En términos por habitante, el PIB se elevó 2,3 %. En cambio, el ingreso nacional disponible creció sólo 0,7 % por efecto de las pérdidas generadas por el deterioro de los términos del intercambio.

Aunque en los últimos dos años la economía creció a una tasa promedio superior al 5 %, en 2004 el empleo se incrementó 2,1 % y la tasa de desempleo abierto descendió ligeramente de 6,7 % a 6,5 %. Al mismo tiempo, cabe agregar que en términos reales el ingreso medio se redujo un 6 %, mientras que los salarios mínimos disminuyeron nuevamente (-1,6 %).

En el ámbito de las cuentas públicas, a pesar del retraso de la aprobación de la Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural, el déficit del sector público global reducido descendió de 4,5 % a 3,6 % del PIB.

Si bien la tónica de la política monetaria fue austera, especialmente en el segundo semestre del año, las fuertes alzas de los precios internacionales del petróleo y de algunos productos básicos industriales contribuyeron en gran medida

al elevado nivel de la inflación (13,1 %), a la apreciación real del colón y al ensanchamiento del déficit comercial.

El Banco Central anunció el aumento de las reservas de dólares en una cantidad que no se había visto en la última década. Sin embargo, la familia costarricense no percibía aún en sus bolsillos esta “bonanza”, si se toma en cuenta que los aumentos salariales de 2003 para el sector público y privado no llegaron siquiera al 5 % cuando la inflación casi llegó al doble.

4.6. Chile

Chile se latinoamericaniza

Desde finales de 2002, la imagen de Chile como el país menos corrupto de América Latina se cayó del pedestal. Al parecer, el llamado “Caso Coima o MOP-Gate” destapó una práctica común y puso en duda cualquier negocio o acción económica que involucrara al estado chileno. Lo que comenzó como una insignificante denuncia se transformó en un enorme *puzzle* político-judicial.

Lagos buscó ganar tiempo para, al menos, tres acciones principales e ineludibles: darle un nuevo perfil a su gabinete, tomar con resolución el liderazgo de la coalición que sustentaba su gobierno y recuperar una creciente dispersión de sus electores. El desafuero de cuatro diputados había reducido la precaria mayoría oficialista en la Cámara y acentuó el marco de sospechas mutuas entre los partidos de la Concertación, al punto de que en la práctica dejó de funcionar y un grupo de dirigentes (bautizados como “cascos azules”) elaboró un documento que pudo servir de base para su “refundación” en marzo de 2004.

Elecciones municipales (octubre de 2004)

Por cuarta vez desde la inauguración de la democracia, los chilenos concurren a las elecciones de alcaldes y concejales en los 345 municipios del país. En esta ocasión, por un cambio en la ley electoral, se elegían en forma separada alcaldes y concejales. Esto obligó a los partidos a complejas negociaciones para nominar a un candidato común. En 70 comunas, la Concertación no pudo impedir que se inscribiera más de un candidato a alcalde por parte de los partidos que la formaban y algo similar ocurrió en 45 localidades en el caso de la oposición. Estos candidatos quitaron valiosos votos a los candidatos a ediles “oficiales” de cada uno de los dos bloques, que podían ser decisivos para determinar quién resultaría elegido. A la vez, estas elecciones estrenaban el sistema de financiamiento político, que incluía como características principales el financiamiento público y los límites al gasto en las campañas.

La Concertación acordó el número de candidatos a concejales para limitar la competencia entre los partidos: el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un 48 % de

candidatos; el Partido por la Democracia (PPD), un 20 %; el Partido Socialista (PS), un 12 %; y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), un 20 %.

Estas elecciones tuvieron una gran importancia porque se realizaban un año antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, y habían sido consideradas como unas primarias. El Presidente llamó a los chilenos a apoyar a los candidatos de la Concertación porque un eventual triunfo de la oposición sería considerado como una derrota de su gobierno. Los ministros participaron en actos electorales durante los fines de semana apoyando a los candidatos de la Concertación, destacando el entusiasmo provocado por la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear (PDC), y la de Defensa, Michelle Bachelet (PS), mostrando una gran capacidad para convocar a los partidarios de la Concertación.

Las elecciones municipales se caracterizaron por combinar los intereses locales y los objetivos representados por la próxima elección presidencial, aunque sin producir una “presidencialización” de los comicios, porque los alcaldes que iban a la reelección se cuidaron de impulsar una campaña que privilegiara el desempeño de sus gestiones.

Los resultados favorecieron a la Concertación, que logró 204 alcaldes (con un 44,79 % de los votos) sobre un total de 344, y la coalición opositora logró 103 (con el 38,59 % de los votos). El resto se distribuyó entre los independientes. Con respecto a los concejales, el comportamiento fue similar: la Concertación se alzó con 1.120 concejales de un total de 2.130. La opositora UDI obtuvo 877 concejales electos.

Aunque un juicio apresurado podría concluir que las elecciones municipales las ganó la Concertación por conseguir la mayor cantidad de alcaldes y concejales en el nivel nacional, un análisis más detallado demuestra que las conclusiones son más profundas. Sobre todo si se comparan los resultados con las elecciones municipales del año 2000. El primer ganador fue Ricardo Lagos, quien tomó un riesgo bastante grande al ponerse al frente de una campaña municipal. De haberle ido mal a la Concertación, él hubiese perdido mucho poder en el último período de su gobierno, pero a partir de ahí lo reconocieron como uno de los artífices del triunfo y contaría con el apoyo de los parlamentarios.

Hacia las presidenciales de 2005

La Concertación no logró un acuerdo, como algunos de sus integrantes pretendían, que consolidara tempranamente un candidato único que tuviera posibilidades de enfrentar con éxito al previsible candidato opositor, Joaquín Lavín. Los indicadores económicos eran muy favorables, con un crecimiento esperado para 2005 del 5 % y para el próximo, del 5,5 %, y las relaciones entre los partidos eran buenas. El PDC enfrentaba una compleja situación porque tenía tres precandidatos: el ex presidente Frei, el senador Adolfo Zaldívar (presidente de la Democracia Cristiana) y Soledad Alvear. Zaldívar tenía escaso apoyo en la opinión pública, aunque tenía esperanzas de ser nominado si el PDC alcanzaba una alta votación el 31 de octubre. Frei no conseguía convertirse en una alternativa presidencial real. Alvear aparecía con más fuerza en la opinión pública y entre los votantes del PDC.

El PS tenía como candidata a la ex ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y el PPD, al senador Fernando Flores, quien no consiguió visibilidad ante la opinión pública. Bachelet estaba mejor situada en las encuestas y a priori aparecía como la candidata más popular de la Concertación.

No sería fácil la designación del candidato común de la Concertación. Las primarias –cerradas a los militantes de los partidos o abiertas a los votantes– serían peligrosas, porque podría dejar heridas en la competencia.

Política económica

La economía chilena creció un 6,1 % en términos reales en 2004, superando con creces la tasa de crecimiento del 3,7 % registrada el año anterior y el 2,2 % de 2002. Este resultado estuvo determinado, en gran medida, por el mayor dinamismo que presentaron las exportaciones, que mostraron un incremento del 39,2 %, y por la inversión interna bruta, que registró la mayor tasa de crecimiento de los últimos nueve años, un 16,1 %.

El aumento de las exportaciones en 2004 se produjo en un contexto de expansión de la economía internacional y de repunte de los precios de las materias primas, incluido el del cobre. La cuenta corriente de la balanza de pagos cerró, por primera vez en los últimos cinco años, con un superávit, cuya magnitud fue del 1,5 % del PIB. Por otra parte, el resultado global del gobierno central registró un superávit del 2,2 % del PIB, mientras que la deuda externa del gobierno central se redujo del 13,1 % del PIB en 2003 a un 10,8 % al año siguiente. En 2004, la inflación fue de un 2,4 %, valor que se encuentra entre los límites de la banda meta establecida por el banco central.

Derechos humanos

Fue durante el gobierno de Lagos que se realizaron avances ciertos en los tribunales en materia de juicios contra los culpables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Entre los logros más importantes, estuvo el nuevo juicio contra Pinochet intentado por el juez Juan Guzmán, por la llamada operación Cóndor y la operación Colombo. Para completar el cuadro de cuestionamiento del régimen militar, se agregó la investigación por evasión fiscal de Pinochet por sus millonarias cuentas bancarias en el Banco Riggs. El gobierno también consiguió que las Fuerzas Armadas pidieran perdón a los familiares y las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Política exterior

Dos temas marcaron fundamentalmente la agenda internacional de Chile durante 2004: el pedido de una salida al mar por parte de Bolivia y la crisis gasífera con Argentina.

Los gobiernos de América Latina apoyaron la demanda de Bolivia. Aparte de la reiterada adhesión a la demanda marítima boliviana del presidente venezolano Hugo Chávez y del gobierno cubano, también se proyectan apoyándola los gobiernos de Perú y Argentina. El gobierno de México y la OEA aparecen, en tanto, consintiendo de algún modo en un tratamiento multilateral del tema. Si bien tras la reacción de la diplomacia chilena se consigue desactivar la tendencia a un tratamiento multilateral del tema en la región, con lo cual se logra que algunos gobiernos expliciten que el asunto es bilateral, persistió aún la imagen de mayor simpatía de éstos hacia la causa boliviana. Una demostración de ello es que el hecho de que el tema de la mediterraneidad boliviana no consiguiera instalarse en la agenda de la Cumbre de Guadalajara y que luego en la última Asamblea General de la OEA, fuera planteado en la prensa como una ardua labor de contención de la diplomacia chilena más que como un apoyo regional a la manutención del tema en el plano bilateral. Los apoyos a la posición chilena reflejados por la prensa provienen predominantemente de fuera de la región: Estados Unidos, la UE y, en particular, Francia, los que adhieren a la tesis del tratamiento bilateral del asunto.

Los yacimientos argentinos de gas natural no eran suficientemente productivos para satisfacer las necesidades nacionales y los compromisos comerciales anteriormente adquiridos con otros países como Chile. Por ello, Argentina canceló unilateralmente la venta de gas natural a Chile con efecto inmediato y dejó al país vecino sin el combustible que producía cerca del 40 % de la electricidad chilena. Ante las protestas de Chile y con objeto de hacer honor, al menos en parte, a los compromisos adquiridos, Argentina compró gas natural en Bolivia, pero este país, tradicional enemigo de Chile, sólo se lo vendía si Argentina se comprometía por escrito a no revenderlo a Chile.

4.7. Ecuador

Presidencia de Lucio Gutiérrez

El 15 de enero de 2003, Gutiérrez asumió como presidente. La coalición gubernamental de izquierdas formada por Gutiérrez no duró mucho, ya que los diferentes puntos de vista en materia de política social y económica de sus integrantes harían que entre julio y agosto de ese mismo año, abandonarían el Ejecutivo el Movimiento Popular Democrático y Pachakutik.

En su discurso de toma de mando, Gutiérrez dijo que su gobierno se iba a basar en cinco ejes fundamentales: el combate a la corrupción, la seguridad interna y externa, la competitividad y crecimiento económico, la reducción de la pobreza y desempleo y el incentivo de las relaciones internacionales. El mandatario también insistió en la reforma política planteada para reestructurar la administración de justicia y la conformación del Parlamento, iniciativa que le generó una pugna con los partidos políticos tradicionales, que poseían una amplia mayoría en el interior del Legislativo.

La preferencia dada por el Presidente a sus parientes para los empleos públicos y a militares en servicio pasivo y activo fue cuestionada por amplios sectores de la sociedad, aunque las autoridades declararon que no existía nepotismo. Nunca había habido un gobierno constitucional con tantos militares en puestos clave de control económico y social; aunque algunos de esos militares revistaban en servicio pasivo, ello estaba dando una excesiva imagen militar en el gobierno y reflejaba la politización de las Fuerzas Armadas. En los primeros meses de gestión, el reparto de cargos produjo discrepancias también entre los partidos de la alianza del gobierno, Pachakutik y la Sociedad Patriótica.

La primera mitad del año 2003 transcurrió entre paros y manifestaciones por parte de maestros, médicos, bananeros, maiceros, petroleros, etc., lo que reveló que la “luna de miel” entre el gobierno y los movimientos sociales había sido corta y que las relaciones con sus aliados resultaron tormentosas. No sorprendió, entonces, que las frágiles alianzas electorales terminaran en una ruptura del gobierno con el MPD y luego con Pachakutik. Desde entonces, Gutiérrez tuvo que enfrentar crecientes manifestaciones en su contra que culminaron hacia el final del año con una huelga de los maestros.

A fines de 2003, Gutiérrez invirtió completamente el mapa político del país. Quienes recibieron con temor su elección en un proceso en el que fueron derrotados los candidatos de la partidocracia y pudieron temer una réplica del fenómeno Chávez, ahora aparecían como sus principales aliados. El ex presidente León Febres Cordero, líder del partido socialcristiano, apareció en la televisión defendiendo abiertamente la continuación de Gutiérrez en el poder, con la muletilla de la institucionalidad del país.

Contra-pactos

El Presidente dedicó gran parte de 2004 a buscar formas de sobrevivir en el poder, pactando alianzas periódicas con los diversos partidos políticos y rompiendo con ellas para aliarse a las fuerzas contrarias. Esto hizo que se lo definiera como un “presidente de alquiler”.

Enfrentaba la conspiración de la vieja partidocracia (la Izquierda Democrática y el Partido Socialcristiano), no sólo por controlar el poder sino, incluso, por separarlo del gobierno. El Presidente debió enfrentar diversos pedidos de revocatoria del poder, en principio liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y luego conducidos por la Izquierda Democrática (ID), liderada por el ex presidente Rodrigo Borja, quien pidió la renuncia de Gutiérrez por “incapacidad para gobernar”. Para enfrentar a sus adversarios políticos, Gutiérrez se amparó en el Partido Social Cristiano (PSC) y logró que su líder máximo, el ex presidente León Febres Cordero, se enfrentara a Borja, destruyendo las intenciones de la ID de defenestrarlo. Borja fue acusado de “golpista” y Febres Cordero afianzó el control del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, entre otras múltiples instituciones del Estado controladas por el PSC durante los últimos 20 años de vida democrática del Ecuador.

Gutiérrez hizo su parte al fragmentar el movimiento indígena, basándose en la asignación de recursos y la distribución de cargos públicos; así, se alió con la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y dividió a la CONAIE al lograr el apoyo formal de las filiales de la Costa y la Amazonia. Su máximo logro en este sentido fue la designación de Antonio Vargas, ex presidente de la CONAIE, como ministro de Bienestar Social. Los intentos de los indígenas de retomar el liderazgo político se vieron truncados; prueba de ello fue el fracaso de dos levantamientos para destituir a Gutiérrez ese año, los que no tuvieron ni de lejos las características de los anteriores, pese al optimismo con el que fueron anunciados.

La alianza con el PSC empezó a fragmentarse semanas antes de las elecciones seccionales del 17 de octubre de 2004, en las que el partido gubernamental, Sociedad Patriótica, fracasó estrepitosamente. De cara a las elecciones, Febres Cordero empezó a tomar distancia del gobierno ante la bajísima aceptación popular de Gutiérrez, lo que podía incidir en una baja de la votación cautiva del PSC. Ante los reiterados comentarios en contra del gobierno, Gutiérrez optó por acercarse al más fuerte enemigo político del líder socialcristiano, el exiliado ex presidente Abdalá Bucaram, líder del Partido Roldosista Ecuatoriano. Así, logró una nueva alianza y decidió presionar a su ex aliado ordenando que la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) —institución encargada de cobrar las deudas de la banca cerrada durante la crisis bancaria de 2000— declarara vencidas las obligaciones que el Grupo Febres Cordero mantenía con la AGD por créditos obtenidos en los bancos cerrados e iniciara el proceso de cobranza coactiva. A la vez, Febres Cordero respondió preparando un juicio político para destituir al Presidente, acusándolo de peculado.

Todo parecía indicar que la jugada de Febres Cordero daría nuevamente sus frutos, pues al pedido de juicio político se sumaron la ID, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik y constituyeron una incómoda alianza, motivada únicamente por el afán de sacar a Gutiérrez del poder. Cuando todo parecía estar listo para la destitución, esta vez sin ninguna movilización social, el Presidente dio la sorpresa al conseguir “el pase” de cinco diputados de las filas del PSC, ID y Pachakutik, con lo que la oposición no logró ni siquiera conformar una comisión legislativa que calificara la procedencia o no del juicio político al Presidente. Así, el juicio pasó al olvido y Gutiérrez logró no sólo salir del aprieto, sino que consiguió una nueva mayoría en el Congreso Nacional con la que ahora apuntaba a mermar el poder del PSC en las instituciones de gobierno.

En diciembre de 2004, el gobierno consiguió dar un giro de 180 grados a la situación política. Mientras que durante el primer semestre parecía casi inminente la salida de Gutiérrez del poder, una variopinta mayoría del Congreso consiguió, saltándose preceptos constitucionales, designar nuevos miembros para el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes anteriores, en su mayoría, tenían algún grado de afinidad con el PSC y la ID. Estos movimientos políticos estabilizaron el gobierno de Gutiérrez, a pesar de que el pronunciamiento de varios sectores del Ecuador era que el Presidente había quedado a órdenes de lo que dispusieran Abdalá Bucaram (PRE) y Álvaro Noboa (PRIAN), y propusieron varias salidas a la situación inconstitucional que se había creado.

Política económica

Contrariamente a lo que sucedía en su panorama político, Ecuador exhibió una rápida expansión, ligada al aumento de la extracción de petróleo por parte del sector privado.

En 2004, Ecuador registró la mayor tasa de crecimiento de la última década, que alcanzó un 6,9 %. No obstante el elevado crecimiento del PIB en 2004, el desempleo aumentó.

Pese a que la situación fiscal está bajo control sobre todo gracias a los ingentes ingresos petroleros, el gobierno tiene escasa capacidad política para realizar varias reformas económicas esenciales, en particular las de los sectores eléctrico, de los hidrocarburos y de la seguridad social, que son clave para asegurar el crecimiento futuro de Ecuador y que no han sido implementadas.

En 2004, el sector bancario comenzó a otorgar como créditos una porción mayor de los crecientes depósitos captados, con lo cual aumentó especialmente el crédito de consumo. Si bien se espera que dicha expansión continúe en 2005, es posible que se desacelere.

El sector externo fue muy dinámico en 2004, gracias al fuerte incremento de las exportaciones de crudo en volumen y en valor, que estuvo acompañado por aumentos significativos (aunque menores) de las importaciones. Así, la balanza de bienes fue positiva y contribuyó al primer superávit de cuenta corriente desde 2000.

4.8. El Salvador

Hacia las presidenciales de 2004

El partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), sintiéndose derrotado en las elecciones legislativas de 2003, inició casi inmediatamente su campaña para encarar con éxito las presidenciales de 2004. El repentino ascenso de su rival, el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), en las preferencias ciudadanas, obligó a los estrategas del partido de derecha a lanzar una fuerte campaña anticomunista, desde la cual se hacía aparecer al FMLN como una amenaza, no sólo para las libertades empresariales, sino para los salvadoreños que vivían ilegalmente en Estados Unidos. Se trató de una campaña sumamente agresiva. Con todo, la ofensiva anticomunista fue insuficiente para levantar la imagen de un partido que era visto por una gran mayoría de salvadoreños como responsable del deterioro de sus condiciones de vida.

La cohesión interna de ARENA se mantuvo en el contexto preelectoral gracias, en parte, al temor y el odio existentes en los círculos de derecha respecto del partido FMLN y, por otro lado, gracias a la incapacidad del Frente de Liberación Nacional para lograr la confianza de los salvadoreños.

El juego de poderes dentro de ARENA sirvió de plataforma a Elías Antonio Saca para convertirse en el candidato del partido de derecha, que dejó atrás a otras figuras.

El FMLN inició la precampaña electoral con una sólida ventaja respecto de ARENA. Pero para finales de 2003, el partido de izquierda ya había dilapidado todo su capital de simpatías ciudadanas. Al parecer, los salvadoreños habrían visto en el candidato escogido, Schafik Handal (conocido por su pasado de dirigente comunista), una prueba palpable de la voluntad de perpetuar el inmovilismo. En este escenario (que se radicalizó hasta llegar a la violencia electoral experimentada en los primeros días de la campaña para las presidenciales), los partidos llamados de centro tuvieron poco eco en la opinión pública.

Los distintos partidos iniciaron su batalla electoral bajo una nueva lectura de la realidad. Los temas sociales fueron los más debatidos, aunque el presidente Flores intentó retomar la iniciativa con sus anuncios de aumentos del salario mínimo y lo que él llamó una iniciativa para bajar los precios de la energía eléctrica y del servicio de telefonía fija.

En el tema de seguridad, el Presidente tomó la iniciativa de impulsar el “Plan mano dura”, lo que fue fuertemente cuestionado por la oposición, que insistió en su ofensiva por una nueva agenda social. Los servicios de comunicación del Presidente vieron en el tema de la violencia de los miles de pandilleros (o de las Maras) diseminados en todo el país una posibilidad para ganarse simpatías electorales. Se anunció públicamente que este tema iba a ser un asunto electoral. Desde entonces, todos los sectores oficialistas anunciaron su deseo de luchar contra la criminalidad juvenil.

Elecciones presidenciales

El 21 de marzo de 2004 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Más de 3,4 millones de ciudadanos estuvieron en condiciones de sufragar en esta quinta elección presidencial que se realizaba en democracia y la tercera después de la firma del Tratado de Paz –firmado el 16 de enero de 1992– entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla del FMLN.

Cuatro fueron los competidores y, según rezaban las encuestas, dos de ellos iban primeros en las preferencias: Antonio Saca, por la oficialista Alianza Republicana Nacionalista, y el ex insurgente Schafik Handal, postulado por el izquierdista FMLN. Una particularidad unía a los dos contrincantes, y era que ambos eran de origen palestino. Saca representaba a la derecha y tenía sólo 39 años; Handal representaba a la izquierda y tenía 74 años. Además, el primero era pro empresarial y el segundo mantenía posiciones pro estatistas de corte marxista. Elías Antonio Saca fue ganador de las elecciones presidenciales con el 57,37 % de los votos. El TSE reportó que se había registrado una “histórica” participación del 70 %, frente al 42,5 % en las elecciones legislativas de 2003.

Presidencia de Antonio Saca (junio de 2004)

Antonio Saca asumió como presidente el 1 de junio de 2004 y al día siguiente de su asunción invitó a los representantes de todos los partidos políticos

para ir construyendo una agenda mínima de puntos que les interesan a los salvadoreños.

Cerca del 80 % de los salvadoreños avalaban la gestión gubernamental a fin de 2004. Destacaban unos y otros su postura concertadora y sus acciones en contra de la delincuencia juvenil en el país.

Los partidos políticos con mayor peso político, FMLN y ARENA, luego de definir mecanismos para seleccionar a los candidatos que participarán en los comicios municipales de 2006, se abocaron a la designación de los pre-candidatos para la totalidad de los municipios. Eran elecciones que o consolidaban el liderazgo de ARENA y SACA o se mantendría la tradicional fórmula política en El Salvador: FMLN vencedor de las Municipalidades y ARENA de la Presidencial. De repetirse esta última situación, implicaría que la correlación de fuerzas no se habrá modificado de manera alguna en este país como para que los ciudadanos le otorguen todo su respaldo a una de las dos principales fuerzas políticas, con lo que nuevamente mantendrá en el filo de la navaja a los partidos minoritarios.

Derechos humanos

Durante la primera semana de 2004 ocurrió la ocupación policial de unidades hospitalarias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que se encontraban en huelga. Por otro lado, un grupo de encapuchados “tomó” la Catedral Metropolitana, exigiéndole al gobierno de Flores que desistiera de sus planes privatizadores en materia de salud. Aunque parezca irónico, fue en ese marco de violencia interna que Kofi Annan, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, declaró finalizada la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz, no sin antes señalar graves falencias en el proceso salvadoreño.

Pese a la clausura oficial de la observación internacional, la ONU se refirió al sistema judicial, señalando que éste había “demostrado ser insuficiente para enfrentar las demandas derivadas de una ola de delincuencia de posguerra en una sociedad donde abundan las armas y hay pocos controles...”. Es más: denunció que “a menudo el sistema judicial funciona con lentitud, y muchos jueces siguen siendo susceptibles a influencias políticas”. De igual forma, el funcionario apuntó sus baterías hacia la Policía Nacional Civil y también calificó como negativa la actitud de desprotección y asedio contra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por parte de otras instituciones estatales. Además, urgió a las autoridades del país a “superar la exclusión económica y social generalizada”.

Denuncias de corrupción (enero de 2004)

La carrera por la Secretaría General de la OEA desatada por la renuncia de Miguel Ángel Rodríguez, colocó a Francisco Flores, ex presidente de El Salvador, como el más serio candidato para asumir las riendas de ese organismo continental. Pero al igual que su homólogo costarricense, fue señalado por malos manejos de

recursos del Estado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Según documentos que obraban en manos de la ex insurgencia, un pozo de agua valorado en U\$S 120 mil fue construido con recursos estatales en propiedad de Flores. El ex mandatario también fue acusado de haber encubierto un millonario desvío de fondos y por irregularidades en licitaciones públicas cometidas en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Política económica

Durante 2004, la economía salvadoreña creció un 1,5 %, con lo cual se completó un quinquenio de retroceso en el PIB por habitante. El incremento en los ingresos de divisas provenientes de las remesas familiares (equivalentes al 16,1 % del PIB) y el aumento de las exportaciones no maquiladoras no fueron suficientes para compensar la caída de la maquila y el desplome de la inversión pública (- 40,4 %), causado en gran medida por la tardía aprobación del presupuesto.

La caída de la inversión pública y la disminución de la inversión privada en el sector de la construcción determinaron que la formación bruta de capital fijo retrocediera un 3,8 %. La inflación anual fue de un 5,3 %, muy por arriba del 2,5 % de 2003, principalmente influenciada por el aumento en los precios de los combustibles. Los principales indicadores financieros mostraron estabilidad favorecidos por las, todavía, bajas tasas de interés internacionales. La inversión extranjera directa (IED) aumentó en forma considerable y ascendió al 2,9 % del PIB.

4.9. Guatemala

Elecciones presidenciales (noviembre de 2003)

El 9 de noviembre de 2003 se realizaron elecciones presidenciales. El vencedor de las elecciones sucedió el 14 de enero del 2004 al mandatario Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que en 1999 había ganado las elecciones.

En las elecciones junto al surgimiento de nuevos partidos y candidatos, Efraín Ríos Montt también vio cumplida su aspiración de ser candidato. La batalla legal de Ríos Montt y su partido, el Frente Revolucionario Guatemalteco (FRG), para ser inscripto como candidato en contra de lo estipulado en la Constitución, generó una cierta crisis política e institucional.

A semanas de las elecciones, nadie dudaba de la victoria electoral de Oscar Berger, de la Gran Alianza Nacional (GAN). Sin excepción, en todos los sondeos concentraba el mayor porcentaje de intención de voto, a gran distancia de sus competidores.

El gobierno de Berger nació obligado a encarar numerosas iniciativas de corte político, económico, social y de seguridad ciudadana para tratar de solucionar los principales problemas del país. Para lograrlo y dado que carecía de mayoría suficiente

en el Congreso, el nuevo Ejecutivo debió llegar a un pacto de gobernabilidad con la oposición—concretamente, con el partido de Colom (UNE)— para evitar caer en una lucha entre instituciones y en la parálisis administrativa.

El oficialista GANA contaba con 48 diputados, a doce de la mayoría absoluta; mientras que la oposición unida sí lograba esa mayoría. El FRG tenía 43 diputados; el PAN, 17; y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 32; los tres grupos sumaban 92 diputados sobre 158. El PAN, enemigo irreconciliable de Berger, anunció una alianza legislativa con UNE y los situó como primera fuerza en el Congreso. Por lo tanto, el FRG tuvo la clave de la gobernabilidad y el precio por su apoyo fue, por encima de todo, la garantía de que no se sometiera a juicio a su líder, Efraín Ríos Montt, por los crímenes contra los derechos humanos durante su presidencia de facto. Por lo tanto, la única manera de no caer en el chantaje del riosmonttismo era que UNE y GANA acercaran posturas para un pacto de gobernabilidad que beneficiara a ambas fuerzas, ya que si bien facilitaba la labor gubernamental de Berger, también mostraba al partido de Colom como una agrupación madura y capaz de superar los enfrentamientos partidarios en aras de la gobernabilidad.

La participación electoral aumentó, en términos relativos, con respecto al evento electoral pasado. El promedio de participación en las dos últimas elecciones fue de 55,8 %, un poco más abajo que en 1990 y bastante más reducido que en 1985.

Asunción del presidente Oscar Berger (enero de 2004)

El 14 de enero asumió la presidencia Oscar Berger, con un discurso llamando a la unidad nacional. Pidió a la población unirse con el gobierno y luchar contra la corrupción para devolver la credibilidad a las instituciones del Estado. Sin embargo, durante su mensaje, criticó la falta de valores morales y éticos del saliente gobierno y prometió desarrollar una administración transparente. El tema económico fue el predominante en el discurso de Berger. Anunció que su administración concluiría las negociaciones y “ajustes” al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, además de reactivar el proceso que el CA-4 había empezado con Canadá e iniciar conversaciones comerciales con la Unión Europea.

Las fuerzas en el Congreso quedaron distribuidas así: GANA, 47 escaños; UNE, 32; PAN, 17; FRG, 40; otros, 22.

Denuncias de corrupción

Pocos días después del cambio de gobierno, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá descubrió catorce cuentas bancarias donde habían sido depositados alrededor de 50 millones de dólares, supuestamente relacionados con una red de corrupción dirigida por altos funcionarios del gobierno guatemalteco anterior, en las que existían indicios de “blanqueo de dinero”.

Los documentos fueron entregados por la UAF al Ministerio Público panameño para que emprendiera la persecución penal por posible blanqueo de capitales. La huida de Portillo hacia México vía El Salvador fue considerada por muchos como una forma anticipada de evadir a la justicia. Su situación personal comenzó a complicarse. Por un lado, el gobierno de los Estados Unidos unilateralmente decidió revocarle la visa que lo habilitaba a ingresar en territorio americano, al tiempo que Vicente Fox, a pocos días de su visita a Guatemala, le negó toda posibilidad de asilo. Por otra parte, luego de que lo solicitara expresamente el presidente Berger, el gobierno estadounidense tomó participación en las investigaciones.

La situación política se tornó compleja, porque colocó en una posición sumamente incómoda a los partidos firmantes del acuerdo de gobernabilidad. Los ex presidentes Álvaro Colom y Leonel López Rodas fueron imputados por haber recibido dinero de la CGCN para financiar sus campañas, pero estos dirigentes leyeron la situación como una maniobra de GANA para obtener más espacio político. El ex dictador Efraín Ríos Montt quedó bajo arresto domiciliario por los violentos incidentes del “jueves negro”, mientras que Colom y López Rodas fueron procesados por el dinero sucio usado para el financiamiento de sus campañas electorales.

Desafíos para el nuevo gobierno

La debilidad y fragmentación de los grupos políticos que integraban GANA se evidenció prematuramente, dándose la primera crisis interna al momento de la repartición de puestos para el Gabinete, ya que los menos favorecidos fueron Partido Patriota (PP), Solidaridad Nacional (PSN) y Movimiento Reformador (MR), mientras que el grupo M-17, sin registro partidario pero la mayor fuerza política afín al mandatario, fue el que asumió la mayoría de cargos. Esta crisis se agudizó, provocó enfrentamientos y, casi de manera inmediata, la desarticulación de GANA en los primeros meses de gobierno, evidenciada con la salida del PP. GANA llegó a pactar con el líder del FRG, Efraín Ríos Montt, circunstancia que dificultó el proceso de transición tanto en lo económico como en lo político y administrativo.

Las organizaciones sociales se comprometieron a no realizar más protestas en un plazo de 90 días, situación que llegó a su fin el 20 de julio, cuando miembros de la Plataforma Agraria tomaron las instalaciones del Ministerio de Agricultura. Los participantes en la concentración hicieron en público una especie de balance alternativo al informe anual que el mandatario presentaba ante el Congreso.

Berger adelantó que en su segundo año de gestión se brindaría mayor prioridad al combate a la inseguridad ciudadana, la inversión y creación de infraestructura, el desarrollo rural sostenible y la generación de empleos. El tema de la inseguridad seguía siendo el talón de Aquiles en Guatemala.

Política económica

La economía mostró en 2004 un mayor dinamismo al crecer un 2,7 %, luego de tres años en que hubo un crecimiento en torno al 2 %; por primera vez desde 2001 hubo un pequeño aumento del producto por habitante. El crecimiento del producto fue impulsado por la demanda externa (6,6 %). Sin embargo, los términos del intercambio empeoraron debido al incremento de los precios del petróleo y de otras materias primas. Se registró un nuevo aumento de las remesas familiares, cuyo monto anual constituyó un récord, equivalente al 9,5 % del PIB, y se incrementaron los ingresos por turismo.

Las nuevas autoridades gubernamentales tuvieron que enfrentar el déficit fiscal de 2003 y la suspensión, por decisiones de la Corte Constitucional, del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA) y del Impuesto a la Distribución de Combustibles. En este marco, el gobierno efectuó un recorte severo del gasto público, ya que las modificaciones tributarias que sometió a consideración del Congreso Nacional fueron aprobadas parcialmente y no fueron suficientes para generar los ingresos proyectados. El déficit del gobierno se redujo del 2,3 % al 1,0 % del PIB, con recortes significativos en el gasto corriente, sobre todo en los de capital.

4.10. Honduras

Presidencia de Ricardo Maduro

A pesar de que el presidente Ricardo Maduro había convocado al “Gran diálogo nacional” (un proceso deliberativo y participativo de toda la sociedad hondureña cuyo propósito era el de crear consensos y acordar metas que permitieran conformar la visión del país al año 2021), su administración se encontraba en uno de los peores momentos de su corta historia. Parecía que no conseguiría culminar un mandato con grandes éxitos.

Por un lado, la Democracia Cristiana (DC) había decidido conformar una alianza que le permitía al Partido Nacional (PN) obtener la mayoría simple en la cámara legislativa, instrumento mediante el cual se aprobaron leyes que definitivamente le aseguraron a la gestión Maduro resolver sus problemas de orden financiero y mantener la gobernabilidad del país durante esos veinte meses.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional había urgido al gobierno la aprobación de la Ley de Servicio Civil y la reducción de la masa laboral en el sector público, punto indiscutible para lograr la firma de la carta de intenciones, situación que provocó una nueva ofensiva de las organizaciones gremiales contra el sector gubernamental.

Empero, la ruptura de la alianza con la DC fue un paso que perfilaba el fracaso del gobierno de Maduro. La situación del país se agravó como consecuencia de la lentitud de la burocracia de la administración. De manera intempestiva se aumentaron las tarifas de los servicios públicos de agua y luz y los precios de los productos de la

canasta básica y no se corrigieron los errores encontrados en los sistemas de recaudación fiscal ni se organizó el ente estatal comisionado para la planificación de la economía nacional.

Sumado a estas dificultades, el avance en la lucha contra el narcotráfico, contra la defraudación y la evasión fiscal era muy lento. El número de desempleados aumentó, la delincuencia continuaba en ascenso; asimismo, no existía clara disposición para resolver el conflicto de los maestros y los médicos ni una política estratégica para combatir y erradicar la explotación irracional de los bosques por los fuertes intereses que el tema trastocaba.

El gobierno de Maduro se distanciaba cada vez más del Poder Legislativo y las relaciones entre ambos poderes se volvían más tensas pero con desventajas considerables para el Ejecutivo porque, al no contar con el apoyo de las bancadas, se le dificultaba impulsar y aplicar nuevas reformas económicas para convenir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Varios de los integrantes del Gabinete se dieron cuenta de que habían perdido poder político y que la paciencia popular estaba llegando a su límite. Porque enfrente, no sólo tenían a la mayoría de los diputados del Congreso en su contra, sino que resultaba que los alcaldes se sentían incómodos y que a los gremios sólo hacía falta que se les hiciera una seña para salir a la calle a protestar en contra del gobierno de Maduro.

En la oposición política ya se había iniciado la carrera por la conquista de la presidencia, los cargos a diputados y el mismo control interno de las estructuras partidarias, lo que dificultó más la situación de la administración Maduro, pues probablemente –por mantener oposición al gobierno– ningún partido estaba dispuesto al costo político de apoyar al régimen. A la vez, la falta de acuerdo con el FMI llevó a Maduro y a su gabinete a serias dificultades, por la escasez de recursos para intentar cubrir las demandas populares tanto en el área rural como en el área urbana.

De igual manera, no se habían elaborado esquemas alternativos de financiamiento, lo que provocó un deterioro más marcado de su gobierno, con consecuencias futuras para el Partido Nacional en el próximo proceso electoral.

Hacia las elecciones presidenciales

La campaña electoral –como antesala– para la celebración de las elecciones primarias que se verificaron el día 20 de febrero de 2005 se inició oficialmente con la convocatoria girada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 20 de agosto del año 2004. En esta oportunidad, sólo se practicó dentro de los partidos políticos tradicionales (Liberal y Nacional).

A partir de octubre de ese año, la administración Maduro quedó disminuida cuando por lo menos 15 funcionarios entraron de lleno a la campaña política en vistas de las elecciones. El año terminó con la lucha feroz de las diversas corrientes de los partidos políticos, preparando las elecciones internas de febrero 2005, de donde saldrían electos los candidatos para las elecciones de noviembre. Se

destacaban los dos precandidatos del partido oficial: el alcalde de la capital, Miguel Pastor, y el presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo. Los dos utilizaban su puesto de funcionarios públicos para sacar ventaja. Una reforma a la Ley Electoral aprobada a mediados del año resultó finalmente un instrumento coyuntural para que estos dos personajes de la política y de la vida pública, junto con los principales precandidatos del Partido Liberal, se afianzaran en sus posiciones dentro del poderoso y tradicional bipartidismo hondureño. La cruzada para la aprobación de la pena de muerte –encabezada por el Presidente del Congreso Nacional (y precandidato por su propio movimiento “Trabajo y Seguridad” para la Presidencia de la República)– fue parte de la campaña proselitista en las elecciones internas de los partidos.

Otro tema abordado en la campaña fue el de la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los candidatos de las diversas corrientes políticas preferían evitar una toma de postura oficial, aunque algunos diputados de los dos partidos tradicionales firmaron una carta en contra de la ratificación del TLC promovida por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP).

El año terminó con el paisaje inundado por una campaña electoral vacía de realidad, con el TLC a punto de ser ratificado por el Congreso Nacional, con un gobierno reducido a su mínima expresión que buscaba endurecer las políticas represivas para recuperar credibilidad en una sociedad afectada por la delincuencia y con un movimiento social que trataba de radicalizar acciones y posiciones de resistencia.

Denuncias de corrupción

La Fiscalía Hondureña dio como cosa juzgada siete juicios contra el ex presidente Rafael Leonardo Callejas por presunta corrupción durante su mandato. Esta decisión, de gran impacto político, provocó que una decena de colaboradores de esa Fiscalía fueran despedidos. La crisis surgió el 20 de octubre de 2004 cuando el Fiscal General anunció que la Fiscalía no iba a continuar apelando los casos contra el ex mandatario y otros catorce ex funcionarios de gobierno, civiles y militares que habían sido encausados por corrupción. Ante esa decisión, la Pastoral Social de la Iglesia Católica aseguró que la lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento de la democracia había retrocedido en Honduras, por lo que instó al Congreso a llamar al Fiscal para que explicara su decisión y actitud.

Política económica

El dinamismo de la economía mundial repercutió positivamente en el desempeño productivo en Honduras, lo que aumentó la tasa de crecimiento de 3,5 % en 2003 a 5,0 % en 2004. El contexto macroeconómico fue estable, pero con algunos indicadores en deterioro, y se mantuvo de igual forma en el primer semestre de 2005. La tasa de inflación llegó a 9,2 %, con lo que se detuvo la tendencia

de varios años hacia la desaceleración. La situación laboral continuó empeorando para llegar el desempleo a 5,9 %. El déficit de la cuenta corriente se ensanchó al equivalente de 5,2 % del PIB, mientras que las finanzas públicas registraron una mejora significativa.

El impacto del dinamismo económico del entorno internacional fue acompañado por factores que contribuyeron a mejorar las expectativas, como la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dio un aval importante a la política económica. También, en el marco de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP) lograron obtenerse importantes compromisos de financiamiento por parte de los países donantes y Honduras fue incluida en la iniciativa conocida como la Cuenta del Desafío del Milenio, fondo creado por el gobierno de Estados Unidos. Por último, se finalizaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA).

4.11. México

Presidencia de Vicente Fox

Desde que Vicente Fox asumió la Presidencia venía instando a la clase política a votar una serie de reformas estructurales que consideraba imprescindibles para la modernización del país. Cambios en el sistema tributario, en el modelo de generación de energía y en el ámbito laboral, entre otros, habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo como forma de aumentar la eficiencia y competitividad de la economía mexicana, para así asegurar mejores bases para un desarrollo sustentable. Hay que destacar que parecía existir algún nivel de consenso con respecto a la necesidad de las mudanzas. Aun cuando la confrontación política se hacía evidente, nadie parecía querer abandonar la perspectiva de las reformas, prueba de ello es que en un documento en el que el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) hacía manifiesta su decisión de suspender el diálogo con el gobierno, al mismo tiempo reivindicaba las reformas como asuntos de agenda nacional. Incluso la Comisión Nacional de Gobernadores, una institución que representaba los intereses de los estados de la Unión, había convocado y establecido la Convención Nacional Hacendaria (instancia en la que participaban mandatarios estatales, dirigentes partidarios, representantes del gobierno federal y municipios), cuyo objetivo era el planteamiento de un nuevo modelo tributario.

Sin embargo, el proceso de reformas se estancó en una serie de iniciativas legislativas que fracasaron en el seno de Congreso. La capacidad del gobierno para movilizar mayorías legislativas a través del control de su propio partido se hizo virtualmente imposible luego del proceso eleccionario de 2003, lo que lo obligó a buscar el acuerdo político con otras fuerzas para viabilizar el proceso de reforma. Los únicos partidos con peso político suficiente para asegurar el éxito de una eventual alianza eran el PRI y el PRD, el primero revitalizado por la victoria en las legislativas y el segundo, con el poder que le otorgaba haber duplicado el número de diputados en los comicios. Sin embargo, y aunque ambas fuerzas se declararon

permeables a la búsqueda de consenso y al logro de acuerdos, estos no pasaron del discurso; los proyectos de reforma no pasaron el tamiz del Congreso.

La dificultad para cerrar acuerdos en torno a la agenda de reformas tuvo que ver no sólo con las diferencias de apreciación que había entre los partidos con respecto al contenido de las mismas, sino por el establecimiento de un escenario cuasi-electoral, en el que las elecciones presidenciales de 2006 aparecían con excesiva presencia.

Elecciones regionales (2004)

La carrera entre los partidos para controlar la mayor cantidad de estados con miras a las elecciones presidenciales de 2006 se encontraba en un punto clave, ya que en lo que iba del año se habían realizado 7 elecciones estatales y faltaban designarse 5 estados más. De la totalidad de los municipios, 126 eran gobernados por el PRI; 46, por el PAN; y 29, por el PRD. Los contendientes recrudecieron su lenguaje en los espacios publicitarios y se manifestaron con términos descalificadores.

Veracruz constituía un punto estratégico ya que con más de seis millones de habitantes, se ubicaba en el tercer sitio a nivel nacional en población y era considerado por los partidos políticos como un estado clave para las elecciones federales.

En un clima de tensión que finalmente produjo varios hechos de violencia, las elecciones en Veracruz mostraron una competencia muy cerrada en la que el voto se dividió en tres partes principales y no en dos como había sucedido en otros estados. Estas elecciones anticiparon algunos rasgos que podrían caracterizar las elecciones en otros estados y la contienda presidencial de 2006. Fidel Herrera, candidato de la Alianza Fidelidad por Veracruz (PRI-PVEM-PRV), ganó la gobernación del estado con el 35,8 % de los votos válidos, menos de un punto porcentual por encima del candidato del PAN, Gerardo Buganza, quien obtuvo el 34,8 % de los votos. Dante Delgado, candidato de la Coalición Unidos por Veracruz que aglutinaba al PRD, Convergencia y PT, obtuvo 29,1 % de los votos. El PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso estatal, la cual fue para el PAN, que ganó en 14 de los 13 distritos que hay en el estado. Por otra parte, más de 2,6 millones de votantes acudieron a votar, lo que equivalió a más del 60 % de la lista nominal.

El hecho de que el voto se distribuyera de manera casi igualitaria entre tres candidatos fuertes se explica, en parte, por la fuerza electoral de Dante Delgado, la derrota del PRI en varios distritos electorales ubicados en la zona petrolera y el avance del PAN en Veracruz y en diversos estados y regiones del país.

Política económica

El 2004 fue un buen año “numérico” para el Presidente: la economía mexicana, aprovechando el viento favorable generado en la región por la economía americana, alcanzó una tasa de crecimiento cercana al 4,3 %.

El dinamismo se centró en las exportaciones, pero el impulso de la demanda fue tan intenso que estimuló la recuperación de la inversión, primero en las propias actividades de exportación y después, en otros sectores relacionados. Este nuevo contexto provocó un cambio positivo en las expectativas, a pesar de la moderada recuperación de los niveles de empleo y del discreto aumento de los salarios, que estimularon el crecimiento del consumo apoyado también en el volumen de las remesas y en la expansión del crédito.

Según un informe del FMI, México se había convertido en uno de los ejemplos de mejora en la estructura de la deuda. El país mantenía una posición privilegiada en relación con su deuda soberana si se lo comparaba con otros países latinoamericanos y había mejorado su calificación de riesgo. México también había avanzado varios escalones en el Índice de Libertad Económica, si bien continuaba presentando serias debilidades en su marco regulatorio para el desarrollo empresarial y laboral, así como en la aplicación del estado de derecho.

Hacia las presidenciales de 2006

Tanto el PRI como el PAN y el PRD enfrentaron graves divisiones internas por la nominación del candidato presidencial para 2006, situación que amenazó sus posibilidades en los futuros comicios. El panorama fue particularmente grave en el PAN, que vio erosionadas las relaciones entre varios de sus dirigentes y cuyo presidente, Bravo Mena, estuvo a punto de ser reemplazado antes de culminar su mandato. Después de la renuncia de Calderón, el ex secretario de Energía, tras el destape de sus aspiraciones presidenciales, fue el turno de Alfonso Durazo (secretario particular de Fox) y de Marta Sahagún. El primero se fue dando un portazo, declarando que no había condiciones para la candidatura de la esposa del Presidente y criticando el apoyo que se le daba desde el gobierno. En un intento por calmar los ánimos, ella lanzó un comunicado para desmentir las especulaciones que la colocaban como aspirante a la candidatura presidencial.

El caliente clima electoral contribuyó a que las soluciones dadas a dos problemas pendientes fueran cuestionadas por los medios de comunicación y por el alcalde del Distrito Federal, López Obrador. Se trataba de la reforma al sistema de jubilaciones del IMSS y el procesamiento al ex presidente Echeverría (1970-1976) por los hechos de violencia de 1971. En varios periódicos se sugirió la existencia de un pacto entre Fox y Madrazo (el líder del PRI) para garantizar la aprobación de la reforma del IMSS a cambio del cierre de la causa de Echeverría.

En cuanto al tema de la seguridad, tras la multitudinaria marcha realizada en junio de 2004 en repudio a la delincuencia, los secuestros y la aparente inactividad gubernamental, Fox anunció un plan de diez puntos contra la inseguridad y el incremento de fondos en la lucha contra el delito. En el marco del plan, varios proyectos de ley fueron enviados al Congreso. El PRI inicialmente los criticó y tildó a Fox de demagogo y oportunista, previo a las elecciones locales de

2005 apoyó la sanción de los dictámenes en comisión y finalmente terminó optando por dilatar el tratamiento de los proyectos más controvertidos hasta el inicio de las sesiones ordinarias.

4.12. Nicaragua

Presidencia de Enrique Bolaños

Uno de los principales temas de la agenda política de la gestión de Bolaños era el proceso al ex presidente Arnoldo Alemán, que en 2004 cumplía dos años desde que este fuera denunciado por la Procuraduría de Justicia por el desvío de más de U\$S 97 millones en fondos del Estado a sus cuentas personales. Como resultado de las investigaciones, luego de su desafuero, Alemán fue puesto bajo arresto domiciliario y desde ese momento su partido fue objeto de importantes niveles de desprestigio y falta de credibilidad, el Liberal Constitucionalista (PLC), lo que fortaleció, como contrapartida, al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Estados Unidos, atento al rumbo político que tomaba el proceso judicial, necesitaba al actual presidente Bolaños para sacar del ruedo al ex presidente Alemán.

El escenario político empezó a cambiar lentamente y dio como resultado la creación del partido oficialista Gran Unidad Liberal (GUL), cimentado en la pequeña fracción parlamentaria (6 diputados de un total de 92) denominada Azul y Blanco, con el objetivo de atraer a sus filas a los seguidores de Alemán para enfrentar en futuros comicios municipales y presidenciales a los sandinistas.

No obstante el desprestigio político que les acarreó a ambos –Alemán y en menor medida, quizás, a Bolaños–, el primero siguió dominando los hilos del poder en la Asamblea de Nicaragua desde su hacienda “El Chile” y desde una cárcel pública adonde fue trasladado posteriormente. En tanto, el presidente Bolaños se fue recuperando lentamente debido al respaldo que le otorgó Estados Unidos para que se materializara la condonación de parte de la deuda externa por el BM, FMI y otros países, así como posteriores promociones que efectuaría la embajada estadounidense para la definición de una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional donde se dejó fuera a la bancada del FSLN.

En el marco de una fuerte ofensiva del Partido Liberal Constitucionalista para amnistiar a Alemán, fue determinante la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que finalmente recayó en una mayoría absoluta de partidarios de Arnoldo Alemán. Apenas cinco días después de elegir a la JD, Luis Benavidez (vicepresidente del PLC en esa instancia de conducción del Legislativo) afirmó que en los tres meses siguientes acabarían con el control judicial del FSLN (dominaba los organismos judiciales), a la vez que lograrían el control de la mayoría de las comisiones de la Asamblea Nacional. Otra polémica declaración que desató un nuevo esquema de debate fue que su partido estaba trabajando en un proyecto para amnistiar al ex presidente Alemán.

Enrique Bolaños salió al paso asegurando que el ser consecuente en su lucha contra la corrupción le permitía oponerse a que la Asamblea Nacional le otorgara

una amnistía o un indulto a Alemán. En ese contexto, el PLC oficializó el control de la mayoría de comisiones parlamentarias, arrojándose 11 de las 24 comisiones permanentes y especiales. Las otras 6 fueron asignadas al FSLN; 2, a Camino Cristiano (CC); y 2, a la bancada Azul y Blanco, y se modificó de esa forma la correlación de fuerzas en lo que respecta al dominio de la mayoría de las comisiones legislativas. Sin embargo, ese reparto de comisiones ocultaba el verdadero interés de los seguidores de Alemán, que era presidir la Comisión de Derechos Humanos y construir la infraestructura política que amnistiara al jefe de los liberales constitucionalistas.

Asimismo, y para presionar a Bolaños y sus diputados de la fracción Azul y Blanco, desde su estadía en una cárcel modelo, Arnoldo Alemán introdujo el rumor de que él y Ortega estarían tramando la destitución del mandatario Bolaños por haber recibido dinero de la “Guaca 2” (la “Guaca 1” era el fondo del que se había apropiado Alemán) durante su campaña política para presidente. Situación que obligó a Bolaños a dar a conocer la unión de esfuerzos con Daniel Ortega, del FSLN, para impulsar una estrategia política que restara un porcentaje importante de la cuota de poder que el PLC había acumulado y de paso, establecer compromisos con el sandinismo para que le permitieran concluir su período presidencial sin mayores contratiempos, además de obtener su respaldo para avanzar en la aprobación de préstamos monetarios al FMI y el paquete fiscal en general, que se encontraba detenido en la Asamblea Nacional.

Como parte del “trueque político”, Ortega había demandado cambios en la Junta Directiva y consensos sobre la Ley de Carrera Judicial, fundamentales para mantener cuotas de poder en esa instancia decisiva para el manejo del sistema de justicia. De manera pública, Ortega confirmó dichos acuerdos asumidos con Bolaños. Anunció que su bancada no apoyaría iniciativa alguna de desafuero por delitos electorales, subrayando que sería el Poder Judicial quien tendría la obligación de hacer prevalecer la ley.

La intención de Alemán de ser amnistiado tuvo que esperar debido a que la relación de fuerzas se había modificado, aunque el peso político del ex mandatario de Nicaragua era sólido a pesar del enorme desprestigio que había acumulado.

Elecciones municipales (noviembre de 2004)

En las elecciones municipales que se realizaron el 7 de noviembre y que entregaron una victoria contundente a los sandinistas en todas las alcaldías de importancia del país incluyendo Managua, ocurrieron dos cosas. Primero, en todas las ciudades, el anti-sandinismo llegó dividido. Por un lado estaban los candidatos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que seguía siendo liderado por Arnoldo Alemán. Y por el otro lado estaban los candidatos del partido Alianza por la República (APRE), liderado por el presidente Enrique Bolaños. Segundo, hubo una afluencia menor de la esperada a las urnas.

Política económica

En 2004 continuó la recuperación iniciada en 2003, tras dos años de bajo crecimiento. Además, en el marco del programa trienal firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2002, se avanzó en la consolidación de la estabilidad macroeconómica general. El producto interno bruto (PIB) real aumentó 5,1 %, impulsado por el dinamismo de las exportaciones y por la expansión de la demanda interna ocasionada por el incremento de la inversión, especialmente pública. Ello determinó un aumento del producto por habitante de 2,5 %, luego de dos años de contracción.

La tasa de desempleo abierto se redujo de 7,7 % a 6,5 %. En cambio, el ingreso medio real creció sólo 0,3 % a causa del repunte de la inflación, que ascendió a 9,3 % debido principalmente al alza en los precios internacionales del petróleo y de algunos productos básicos industriales.

Aunque el desequilibrio fiscal se redujo, la mayor disponibilidad de recursos financieros permitió tanto aumentar el gasto público de inversión y de lucha contra la pobreza como disminuir el endeudamiento con el sistema financiero, en particular con el banco central. La política monetaria fue levemente expansiva.

A principios de 2004 el gobierno anunció oficialmente que el Banco Mundial y el Directorio del Fondo Monetario Internacional habían aprobado la incorporación de Nicaragua al Punto de Culminación de la Iniciativa del HIPC, lo que significó la condonación del 87 % del valor nominal de la deuda externa. En números redondos eran 96 millones de córdobas (US\$ 4,5 millones), equivalentes a más de seis años del presupuesto nacional.

4.13. Panamá

Centenario de la República

Bajo la presidencia de Mireya Moscoso, Panamá llega a su primer centenario como República (noviembre de 2003) envuelta en luchas sociales. En octubre de ese año se llevaron a cabo jornadas de movilización por un referéndum limpio y transparente sobre la ampliación del Canal y una huelga nacional en defensa del Seguro Social. Desde hacía meses se venía librando la lucha contra la privatización de la Caja de Seguro Social.

Elecciones presidenciales (mayo de 2004)

En lo político, el gobierno de Mireya Moscoso había sufrido un desgaste natural que fue utilizado durante la campaña electoral por sus opositores; el debate político de los candidatos a Presidente fue escaso, aunque se tocaron los temas económicos, sociales y políticos que al electorado le atraían, entre ellos algunos casos específicos de corrupción.

El primer domingo de mayo, la oposición se alzó con la presidencia en los primeros comicios presidenciales luego de la entrega del Canal en diciembre de 1999. A la cita electoral, se presentaron en esta ocasión cuatro candidatos. El Partido Arnulfista, junto al Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y el Partido Liberal, conformaron la coalición Visión de País. El partido oficial, controlado con mano de hierro por Mireya Moscoso, escogió como candidato al ministro de Relaciones Exteriores, José M. Alemán, quien quedó atrapado en la obligación de defender a un gobierno desprestigiado.

El gran favorito fue, en todo momento, el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD). El candidato fue Martín Torrijos, hijo del fundador del partido, quien se deshizo de la línea nacional-populista de su padre y enfocó su programa de gobierno en la modernización del Estado con propuestas centristas. En esta ocasión, el PRD se presentó aliado con el Partido Popular (antigua Democracia Cristiana, de centro), conformando la alianza “Patria Nueva”. En este contexto de descrédito, el principal oponente de Torrijos no fue el candidato oficial, sino un ex presidente de origen arnulfista pero fuertemente enfrentado con Moscoso, Guillermo Endara. El cuarto candidato, sin mayores posibilidades, fue Ricardo Martinelli.

Tal como anticiparon las encuestas, Torrijos obtuvo un claro triunfo sobre Endara, luego de una campaña electoral cuyo denominador común fue la ausencia de contrastes ideológicos fuertes.

En cuanto a la elección legislativa, los resultados obtenidos por el PRD le permitían gobernar con un sólido sustento legislativo: junto a las bancas del aliado Partido Popular, accedió a la mayoría en la Asamblea Legislativa. Torrijos obtuvo el 47,4 % de la votación total, porcentaje que le permitió alzarse con 42 escaños en el Congreso contra 23 bancas que lograron las cinco fuerzas restantes.

El Supremo Tribunal Electoral había planteado metas novedosas para el evento electoral, tales como introducir el Padrón Fotográfico Electoral, disminuir el tiempo de Transmisión Extraoficial de Resultados (conteo rápido), mejorar la calidad de las actas, de los escrutinios y del sistema de emisión de credenciales. El TE afirmó que la participación fue del 77 % frente al 76 % del 99.

Asunción del presidente Martín Torrijos (septiembre de 2004)

Cuando el 1 de septiembre de 2004 asumió la presidencia, Martín Torrijos debió hacer frente a importantes desafíos. La situación social era difícil en un país con alto desempleo (14,5 %) y una pobreza acuciante: un 40 % era pobre y un 26 % estaba inmerso en la pobreza extrema. Por otra parte, debió asumir la resolución de la crisis del sistema jubilatorio. En tercer lugar, Torrijos debía revertir la generalizada imagen de corrupción dejada por el gobierno de Moscoso, que había calado hondo en las percepciones de la sociedad panameña.

Política económica

La economía panameña registró en 2004 un crecimiento de 6,2 % gracias a la pujante demanda externa y al impulso fiscal a la demanda interna. La inflación siguió siendo baja y la tasa de desempleo disminuyó. La posición financiera del Estado se debilitó, al tiempo que el déficit externo se ensanchó a 8,5 % del PIB.

Tanto los sectores tradicionales vinculados a la demanda externa, al Canal de Panamá, a la Zona Libre de Colón y al Centro Bancario Internacional como otros sectores de servicios internacionales –puertos, turismo, telecomunicaciones y transporte ferroviario– contribuyeron al robusto crecimiento del producto. Debido al proceso electoral que se dio en 2004, el gobierno saliente usó la política fiscal para dar un empuje adicional a la economía, lo que significó un empeoramiento de la situación financiera del Estado. Ello obligó al nuevo gobierno, que asumió en septiembre, a descartar el cumplimiento de la meta del déficit fiscal por debajo del 2 % del PIB.

Derechos humanos

El gobierno de Moscoso aceptó la responsabilidad del Estado en la desaparición de 110 opositores durante el régimen del general Omar Torrijos (1968-89) a menos de una semana de que su hijo asumiera la Presidencia. La Comisión de la Verdad había sido creada por Moscoso el 18 de enero de 2001 para documentar los casos de los desaparecidos y asesinados. La Comisión de la Verdad había entregado, dos años antes, un voluminoso informe con testimonios, declaraciones y documentos desclasificados del Ejército panameño y del gobierno de Estados Unidos que permitieron documentar los 110 casos de desaparecidos y asesinados por oponerse al régimen militar.

Política exterior

Una semana antes de dejar el cargo de presidenta, Mireya Moscoso indultó a cuatro anticastristas que cumplían una condena carcelaria por haber participado en un complot para asesinar a Fidel Castro en noviembre de 2000. Se trataba en realidad de terroristas, entre quienes estaba Luis Posada Carriles, acusado de haber hecho explotar un avión de Cubana que causó la muerte a 73 personas. Sobre la base de esa decisión, La Habana anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá por tiempo indefinido y acusó a Moscoso de “cómplice y protectora del terrorismo”.

La presidenta panameña adujo “razones humanitarias” para beneficiar a los terroristas, alegando que si eran entregados a Cuba o Venezuela podrían ser condenados a pena de muerte. Venezuela calificó estas declaraciones como “ofensivas, tendenciosas e irrespetuosas de la dignidad y el gentilicio del pueblo venezolano” y exigió su inmediata rectificación. El vicescanciller venezolano anunció el

retiro “de inmediato” del embajador venezolano en Panamá y la suspensión de la visita oficial que tenía prevista el presidente Chávez al país centroamericano a propósito del traspaso de mando de Martín Torrijos el 1 de septiembre.

Denuncias de corrupción

El inicio del período de gobierno de Torrijos se caracterizó por las denuncias de corrupción hacia la anterior administración. La ex mandataria Mireya Moscoso fue acusada de derrochar cuantiosos fondos del presupuesto del Ejecutivo colocados en el fondo discrecional. Acto que no tuvo un peso político tan elevado, a diferencia de la denuncia de haber recibido U\$S 1 millón de parte del gobernante de Taiwán, Chen Shui-Bian como “regalo de cumpleaños”. El Tribunal Electoral decidió levantarle el fuero del que gozaba la ex presidente para que fuera indagada por el Ministerio Público en relación con el mal manejo de partidas secretas y los dineros donados a la Fundación Mar del Sur.

El gobierno denunció a Norberto Delgado, ex ministro de Economía y Finanzas, por fraude fiscal. Fue éste el primer funcionario del gobierno de Moscoso denunciado por supuestos actos de corrupción.

4.14. Paraguay

Asunción del presidente Nicanor Duarte Frutos (agosto 2003)

El 15 de agosto de 2003 tomó posesión del mando Nicanor Duarte Frutos. Un juez decretó que el presidente saliente, Luis González Macchi, debía permanecer en el país para ser juzgado por defraudación después de entregar el cargo a su sucesor. El juez adoptó la medida para imputar al mandatario en un juicio abierto por el desvío de U\$S 16 millones de un banco privado intervenido por el Banco Central en el que González Macchi era indicado como autor intelectual y cómplice de los ex directores de la banca matriz. Sin embargo, este no fue el único proceso judicial que tuvo que enfrentar el ex mandatario, ya que también fue imputado en otros casos, como en el proceso por la contratación de un escribano privado para la ampliación de capital de COPACO S.A.

Renovación de la Corte Suprema

La renovación de la Corte Suprema de Justicia, sospechada de actos de corrupción y de ser presa de intereses sectoriales, se había convertido en uno de los principales objetivos políticos que se había fijado el nuevo presidente. Para ello, había sostenido diversas reuniones con líderes de la oposición, que también consideraban necesario cambiar a varios miembros del polémico tribunal. A resultas de esto, se remitió un proyecto de ley a la Cámara de Senadores en el

que se establecía transitoriamente una jubilación para los entonces jueces de la Corte Suprema. Sin embargo, tanto el oficialismo como la oposición difirieron en el número de miembros a remover y en los eventuales reemplazos. Se temía que se produjera un proceso de *cuotización* de la Corte en el que cada uno de los partidos intentara imponer sus propios candidatos, atendiendo más a fidelidades políticas que a la idoneidad para el cargo.

El proceso de negociación en torno a la selección de los jueces fue intenso tanto entre los partidos como dentro de los mismos, y dio como resultado la nominación de los siguientes magistrados: José Altamirano (Patria Querida), Miguel Bajac (PLRA), Alicia Pucheta de Correa (Partido Colorado), Sindulfo Blanco (PLRA), Raúl Torres Kirmser (Partido Colorado) y César Garay Zuccolillo (neutral). La nueva Corte fue saludada por toda la dirigencia paraguaya, a la espera de que este fuera un elemento importante en la erradicación de la corrupción y para que, según las palabras del presidente del Congreso, Mateo Balmelli, “el pueblo paraguayo recupere su fe y su confianza en la justicia y, a través de ello, lograr el desarrollo del país”.

Atentado contra el Presidente

En un episodio confuso que nunca terminó de ser aclarado, desde fuentes gubernamentales se dio a conocer la existencia de un plan para acabar con la vida del Presidente. El mandatario debió postergar su retorno al Paraguay desde sus vacaciones en Brasil (enero de 2004), dado que datos de inteligencia del gobierno brasileño le sugirieron la posibilidad de un atentado. Semanas atrás, Frutos había recibido el consejo de la embajada de los Estados Unidos de reforzar su seguridad.

Elección de autoridades de la Cámara de Diputados

La elección de las autoridades de la Cámara de Diputados dejó un sabor amargo en las filas del Presidente. El candidato oficial a quedarse con la presidencia de la sede legislativa, Benjamín Maciel Pasotti, fue derrotado por el también colorado Oscar Salomón, que contó con el apoyo de la oposición y de algunos colorados disidentes. Si bien en términos reales no era mucho lo que cambiaba esta decisión, el compromiso directo que asumió el primer mandatario con el candidato derrotado marcaba una señal de alerta con respecto a las relaciones con el partido.

Regreso de Lino Oviedo

El regreso del ex general Lino Oviedo dominó el escenario político durante el mes de junio de 2004. El partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), fuerza política que respondía a Oviedo y que contaba con representación en ambas cámaras del Congreso, preparó el retorno de su líder buscando garantías en

la dirigencia local, incluso del propio Presidente, acerca de un tratamiento justo. No obstante, inmediatamente después de tocar suelo paraguayo, Oviedo fue recluido en una prisión militar. El ex general aseguró que había vuelto para probar su inocencia y no para obrar como factor de desestabilización. Sin embargo, su presencia no pasó inadvertida y el gobierno ordenó un gigantesco operativo de seguridad para evitar eventuales enfrentamientos entre facciones políticas contrarias. Y las especulaciones políticas no faltaron: desde diversos sectores se especuló sobre una posible concertación entre Oviedo y el presidente Duarte que le permitiría a éste contar con el apoyo de UNACE y a aquél, recuperar sus derechos políticos. El gobierno de Duarte Frutos se encontraba debilitado y estancado, lo cual se reflejaba en el difícil trance que los proyectos del Ejecutivo debían pasar en el Congreso. Y los resultados de sus iniciativas eran inciertos.

Política económica

El desempeño del sector real de la economía se dio en un contexto de ordenamiento de la economía y de la administración pública, para lo cual se aprobaron leyes y resoluciones que otorgaron mayor transparencia y eficiencia a la economía. En gran parte, estas medidas se insertan en el conjunto de acciones acordadas con el Fondo Monetario y regidas por el acuerdo de derecho de giro firmado en diciembre de 2003. El Fondo dejó a disposición del país una línea de crédito de hasta U\$S 60 millones que se podía utilizar sólo en caso de alguna crisis general y para fortalecer el nivel de reservas.

Durante el año 2004, la economía paraguaya creció un 4 %, la tasa de crecimiento más alta desde el 1995. A diferencia de lo sucedido en 2003, esto no se debió solamente a la expansión del sector agrícola sino también a la recuperación de actividades no agrícolas, especialmente la producción de carne y el comercio. La tasa de inflación se redujo, notablemente, a un 2,8 %.

La tasa de desempleo se situó en un 7,3 %, porcentaje que se compara con un 8,1 % en 2003. El saldo fiscal de la administración pública fue un superávit cercano al 1,6 % del PIB, que representa un cambio de signo en relación con el déficit del año anterior (-0,4 %).

Política exterior

De acuerdo con las intenciones de la administración, Paraguay intentaba tener un papel más preponderante en el ámbito del Mercosur, en aras de mejorar la imagen del país en el exterior y de sumar apoyos para su agenda. La idea en la esfera del bloque era hacer notar las asimetrías que Paraguay guardaba con respecto a sus vecinos, que creaban la necesidad de que se le diera un trato privilegiado. Para esto sirvió la participación de Duarte Frutos en la Cumbre Presidencial de Mercosur, donde expresó que el proceso de integración regional no era más que palabras y nada de acción y que se estaba cerca de empobrecer aún más a los

pueblos si no se tomaban medidas. Tras la participación en la Cumbre, el mandatario paraguayo viajó a Buenos Aires, donde tuvo un encuentro con Néstor Kirchner. Entre los temas tratados figuraron los respectivos al emprendimiento binacional por la represa de Yacyretá (se decidió una revisión del acuerdo) y al diferendo surgido por la decisión argentina de establecer trabas a las mercaderías en tránsito (se acordó la fiscalización conjunta de esas trabas).

4.15. Per

Presidencia de Alejandro Toledo: debilitamiento del gobierno

El presidente Alejandro Toledo vivía sus momentos más difíciles desde su acceso a la presidencia. Toledo convivía con índices de popularidad que se mantenían en la franja entre 6 y 10 % de aprobación, en buena medida debido a promesas incumplidas, escándalos de corrupción y denuncias que tocaban a su entorno, sumado a un estilo de gobierno que desagradaba a los peruanos. La gran paradoja fue que tal derrumbe de la popularidad presidencial se produjo con una economía no sólo en crecimiento, sino que lo hacía con promedios muy buenos en relación con los estándares regionales.

El gobierno de Toledo comenzó a verse rodeado por los escándalos, que no sólo lo ligaban a él sino también a su entorno familiar (en especial, a dos de sus hermanos y a la primera dama, Eliane Karp) y a funcionarios cercanos. La situación política llegó a un punto crítico ante denuncias que indicaban que el Presidente poseía una millonaria cuenta bancaria en Luxemburgo; el mandatario admitió que su esposa tenía una cuenta en el país europeo desde 1989, aunque negó que ésta tuviera algo de irregular. Ante la presión de la opinión pública, en el tradicional mensaje en el aniversario de la Independencia, Toledo autorizó el levantamiento de su secreto bancario y pidió la revisión de su patrimonio individual y conyugal, a la vez que pidió que se levantara el secreto bancario a los ministros, congresistas, funcionarios regionales y a los precandidatos presidenciales.

No sólo los escándalos sino también la oposición habían rodeado a Toledo. El Congreso eligió como presidente, en una muy ajustada votación (60 votos a favor, 57 en contra y uno en blanco), al dirigente opositor Antero Flores (PPC), miembro de la bancada Alianza Electoral Unidad Nacional. La victoria de Flores sobre el ex ministro oficialista Luis Solari constituyó una importante victoria opositora y esta situación en el Congreso abrió las puertas para la formación de un movimiento para buscar la renuncia del Presidente tras la ola de denuncias de corrupción en su entorno familiar. La situación del oficialismo en el Congreso se deterioró rápidamente. Los legisladores del partido oficial, Perú Posible, eran apenas el 35,8 % del cuerpo y ni siquiera podía garantizarse la fidelidad de este grupo, mientras que los partidos de oposición comenzaron a aglutinarse.

Política exterior

Perú fue aceptado como estado asociado del bloque comercial del Mercosur. La incorporación fue firmada en una cumbre de los presidentes de los respectivos países a la que el mandatario peruano no pudo asistir porque el Congreso no se lo permitía ya que debía nombrar el nuevo gabinete luego de pedir la renuncia de todos sus ministros.

En octubre de 2004, los presidentes del Perú, Alejandro Toledo, y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, suscribieron el acuerdo final para la construcción de la carretera que unirá a los dos países, en el que fue el primer acto de integración efectiva de la Comunidad Sudamericana de Naciones. El presidente brasileño destacó que la construcción de la carretera “es mucho más que un proyecto binacional” porque, según dijo, interesa a todos los países de la Comunidad Sudamericana. El presidente de Perú dijo, por su parte, que la Comunidad Sudamericana de Naciones “nace con un resultado muy concreto” y anunció que la carretera sería culminada antes del término de su mandato en 2006. Toledo informó que su gobierno también había decidido concluir con la construcción del Eje Intermodal del Amazonas, que uniría las ciudades norteñas peruanas de Paita, Bayovar y Yurimaguas con la brasileña Manaus.

Política económica

Gracias al dinamismo de las exportaciones y el repunte de la inversión privada, la economía peruana creció un 4,8 % en 2004, superando las expectativas de principios del año. Las favorables condiciones externas y el ordenamiento macroeconómico iniciado en los años anteriores facilitaron este resultado. En este contexto, se alcanzó un elevado superávit comercial de 1.950 millones de dólares, mientras que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo a solo 10 millones de dólares. Las reservas internacionales aumentaron más de 2.400 millones de dólares, con lo cual llegaron a 12.600 millones de dólares y cubrieron la totalidad de los pasivos en dólares del sistema bancario, más la deuda externa a corto plazo.

En el transcurso de 2004, la estabilidad de precios se vio perjudicada por el alto costo de los combustibles. Sin embargo, a fines de año, el aumento interanual de precios fue del 3,5 %, valor que se encuentra en el límite superior de la banda establecida por las autoridades en su esquema de metas de inflación.

El crecimiento económico tuvo efectos limitados en los indicadores laborales. Si bien se registró una significativa generación de empleo formal, fue insuficiente para bajar el desempleo, que se mantuvo en un 9,4 %. El desempeño insatisfactorio del mercado laboral también se reflejó en el estancamiento de los salarios reales.

Perú ha tenido una buena performance bajo el Programa del FMI (SBA), programa que ha ayudado a mantener sólidas bases para políticas cuyo objetivo es otorgar estabilidad macroeconómica, reducir la vulnerabilidad de Perú asociada

a una alta dolarización y una deuda pública y promover la inversión privada. Perú continuó con su compromiso de disciplina en las políticas macroeconómicas acordes al programa con el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas permitieron una baja inflación, una tasa de tipo de cambio estable, un rápido crecimiento de las exportaciones y una relativa solidez en el sistema financiero. La situación política doméstica se mantuvo débil, ya que el apoyo popular a Toledo se mantuvo bajo y carecía de una mayoría estable en el Congreso.

4.16. República Dominicana

Elecciones presidenciales (mayo de 2004)

Esta vez, las encuestas no se equivocaron: en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 16 de mayo, el ex presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, que gobernó entre 1996-2000), derrotó (56 % contra 34 %) al entonces presidente Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Pese al clima de violencia en algunas regiones del país y de desconfianza y denuncias entre las fuerzas políticas, las elecciones se llevaron a cabo con relativa normalidad y los resultados fueron respetados. Desde el punto de vista electoral, dos novedades caracterizaron estas elecciones: la supresión de los recintos cerrados y la utilización del voto de los dominicanos en el extranjero.

En el ámbito político, el triunfo electoral logrado en primera vuelta constituía una ventaja a favor del presidente electo, pues le brindaba el tiempo suficiente para entrar en contacto con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados (en donde no tenía mayoría) para buscar los acuerdos necesarios en torno a las medidas que permitieran estabilizar la economía.

Asunción del presidente Leonel Fernández (18 de agosto de 2004)

Al proclamar su discurso de la victoria, Fernández ofreció “una rama de olivo” al derrotado oficialismo y elogió la “gallardía y generosidad” de Mejía al reconocer su derrota “antes que la Junta Central Electoral”. “Ahora de lo que se trata es de que trabajemos todos para tratar de sacar al país de la crisis y que vuelva el progreso”, dijo el ex mandatario. La victoria de Leonel Fernández generó un cambio favorable en la opinión de los agentes económicos.

La necesidad de reevaluar la moneda, controlar la inflación, disminuir el desempleo y mejorar los servicios sociales básicos eran algunos de los desafíos de la nueva gestión de Fernández. En el terreno comercial, era muy probable que el mandatario tratara de profundizar el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en abril de 2004. Otras dos prioridades de Fernández serían impulsar una reforma tributaria –uno de los compromisos asumidos por el Estado dominicano en el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional– y vender los activos de los bancos quebrados para reponer el déficit fiscal y estabilizar la moneda local.

Sin embargo, dada la correlación de las fuerzas políticas, donde la composición parlamentaria y de gobiernos municipales era adversa al Partido del Presidente, el diálogo, la negociación y la concertación eran los instrumentos a los que Fernández debía recurrir para asegurar la gobernabilidad política, generar confianza y recuperar la estabilidad económica.

Política económica

República Dominicana enfrentaba una compleja transición gubernamental, quizás la más delicada desde su retorno a la democracia. El país padecía una fuerte crisis financiera y monetaria, combinada con un enorme déficit en el sector eléctrico, agravada por los altos precios internacionales del petróleo. Adicionalmente, el acuerdo con el FMI estaba suspendido porque el gobierno había incumplido algunos de sus objetivos, lo que obligaba a la adopción de medidas que no podían esperar si se deseaba evitar una ruptura que agravara aún más la situación.

Una transición sin sobresaltos era crucial, toda vez que República Dominicana tenía fuertes compromisos de deuda externa que cumplir en lo que restaba de ese año (70 millones de dólares) y que debía cerrar una brecha financiera en su balanza de pagos de unos 100 millones de dólares.

La actividad económica en la República Dominicana creció un 2 % en 2004, cifra que revirtió la retracción del 1,9 % registrada en 2003 y superó las expectativas de inicios de año. El sector exportador tuvo un desempeño positivo aunque moderado, ya que aumentaron el arribo de turistas y las exportaciones de bienes nacionales, pero la actividad en las zonas francas prácticamente estuvo estancada.

También se elevaron un 6,8 % las remesas familiares, que alcanzaron un monto equivalente al 12 % del PIB. La demanda interna, en contraste, siguió padeciendo las consecuencias de la crisis bancaria de 2003.

El consumo acusó una gradual recuperación y la inversión retrocedió por décimo trimestre consecutivo. En la segunda mitad del año, tras las elecciones presidenciales y la adopción de un drástico programa de estabilización, se invirtió la depreciación del tipo de cambio nominal (21 % de diciembre a diciembre), se redujo — a pesar de los elevados precios internacionales del petróleo — la inflación (28,7 % entre los mismos meses) y las tasas de interés de los certificados de inversión del banco central bajaron de casi un 60 % a mediados de año, a un 25,4 % en diciembre. Todo ello favoreció la reactivación de diversos sectores productivos.

Sin embargo, el déficit global del sector público se mantuvo alto, un 6,7 % del PIB, e incluyó un elevado déficit cuasi-fiscal del banco central del 4 % del PIB. Asimismo, se acumularon atrasos en el servicio de deuda externa, en parte debido a la renegociación de pasivos con el Club de París.

En 2004, el desempleo y la subocupación en actividades informales se elevaron y las remuneraciones reales retrocedieron por tercer año consecutivo. Por otra parte, a fines de año, el huracán Jean provocó daños de consideración en materia de infraestructura.

Desastre natural (mayo de 2004)

La agenda electoral pasó a un segundo plano cuando las fuertes lluvias que azotaron las región fronteriza entre Haití y República Dominicana desencadenaron graves inundaciones por el desbordamiento del río Soliette (o Blanco) en Jimaní, con graves saldos humanos en ambos países. Las lluvias, las peores en los últimos diez años en República Dominicana y Haití, causaron un número de muertos cercano al millar; mientras las autoridades dominicanas reportaban algo más de 400 muertos, desde Puerto Príncipe se contabilizaban otras 570 víctimas.

4.17. Uruguay

Elecciones presidenciales (octubre de 2004)

El candidato de la izquierda, Tabaré Vázquez, fue electo presidente del Uruguay el 31 de octubre por la mayoría absoluta del electorado. Era la primera vez en la historia del país que la izquierda obtenía el gobierno nacional.

El Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría alcanzó la presidencia con el 50,4 % de los votos. El Partido Nacional obtuvo el 34,3 %; el Partido Colorado, el 10,4%; y el Partido Independiente, 1,8 % (el 3 % restante se dividió entre otros partidos pequeños, votos en blanco y nulos).

El partido triunfador, el EP, tuvo mayoría parlamentaria propia. Ya desde 1999 tenía una mayoría relativa (40 %). El sector del EP que logró más apoyo fue el de los antiguos tupamaros, que obtuvo alrededor de un tercio de las bancas del EP.

El Partido Nacional, con algo más de un tercio de la votación y de los escaños parlamentarios, recuperó posiciones luego de su pobre votación en 1999 (que fue de poco más de un quinto de los votos). Esta recuperación fue consecuencia de la renovación de la dirigencia del partido, encabezada por el candidato presidencial ganador de la elecciones internas abiertas de junio de ese año, Jorge Larrañaga.

El partido de gobierno, el Colorado, resultó muy perjudicado por la crisis económica que sufrió la región entre 1999 y 2003 y por el deterioro de la imagen del presidente Jorge Batlle. Su votación en estas elecciones fue la más baja de toda su historia: apenas llegó a la tercera parte de la obtenida en octubre de 1999.

El nuevo Partido Independiente, por último, obtuvo una banca en la Cámara de Diputados.

El FA logró la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios (55 % del Senado, 52 % de Diputados), en una posición que ningún partido uruguayo alcanzaba desde 1950, pero no tendría un amplio margen de maniobra en lo que se refiere al rumbo económico.

Tranquilidad en los mercados

Uno de los puntos clave del nuevo gobierno ya estaba claro: el ministro de Economía sería el entonces senador del EP Danilo Astori, una figura moderada que coincidió con todas las medidas importantes que había tomado el anterior gobierno respecto de la deuda soberana. También era clara su postura en el ámbito internacional. La nominación de Astori contribuyó a alejar temores de los mercados, que no reaccionaron negativamente ante el ascenso político de la izquierda. El valor del dólar y el riesgo país no aumentaron en los días previos a la elección ni luego de ella.

Política económica

En 2004 la economía uruguaya registró un crecimiento del producto de un 12,3 %, muy superior al esperado y en el que destacó la industria manufacturera como sector más dinámico (21,6 %) y de mayor incidencia (3,7 %). A pesar de esta cifra excepcional, el producto per cápita fue un 9,5 % inferior a los valores de 1998. La demanda interna aumentó un 13,3 % como consecuencia de un alza del 11,4 % del gasto correspondiente a consumo final y del 27 % de la formación bruta de capital.

Este desempeño favorable de la economía se produjo en medio de importantes acontecimientos políticos, como la realización de elecciones nacionales en octubre de 2004, en las que triunfó un sector político que nunca había gobernado.

El desempleo mantuvo su tendencia descendente para ubicarse en un 12,1 % en el trimestre móvil finalizado en diciembre y el salario medio real no mostró variaciones con respecto al del año 2003.

Los desafíos que deberá enfrentar Vázquez son concretos: según datos de organismos internacionales, el 56 % de los niños uruguayos vive en la pobreza; luego de la crisis económica de 2002 no hubo aumentos salariales en los principales sectores de la economía y la desocupación se encontraba en uno de sus records históricos, aunque camuflada por la alta tasa de emigración.

La deuda externa es otro de los grandes problemas a resolver. Los miembros del EP-FA aseguran que pueden seguir el ejemplo de Argentina y lograr una reestructuración de los vencimientos que incluya una quita de capital e intereses. Claro que en una fuerza heterogénea como la que comanda Tabaré Vázquez, las opiniones sobre este punto son muchas y todas parten de la base de que un país pequeño como Uruguay no puede sentarse a la mesa de negociación sin el apoyo del Mercosur.

En materia económica, Uruguay fue favorecido durante el último año por la devaluación de la moneda, lo que reavivó la producción agropecuaria, principal fuente de ingresos y exportaciones. Este mismo envión productivo será la única ventaja con la que correrá Tabaré Vázquez, que anunció que uno de sus principales objetivos es la reactivación de las industrias cerradas en las últimas décadas.

Tanto los sectores moderados del FA-EP como los ex guerrilleros como el tupamaro José Mujica (el senador que más votos obtuvo en esta elección) insistían en

que el Estado no debía ser el que se encargara de la reactivación de las fábricas y promovían la inversión extranjera en muchos sectores de la economía. Pero en lo concreto, esa propuesta deberá superar varios obstáculos. El sistema bancario uruguayo, golpeado por la crisis desde 2001, seguía favorecido por el tipo flotante de cambio y la libertad de los exportadores para liquidar sus dólares. Pero Uruguay es sólo un país de paso para el capital financiero.

4.18. Venezuela

Plan contra el Presidente

Dos diputados oficialistas le entregaron un video a la prensa en el que supuestos agentes de la CIA entrenaban a policías para realizar atentados contra el gobierno de Hugo Chávez entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2003. El vicepresidente José Vicente Rangel se reunió con representantes del Centro Carter, de la OEA y de su país en la ONU para hacerles oír una grabación telefónica entre Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) exiliado en Costa Rica y Manuel Cova, secretario general de la misma organización. Por su parte, Carlos Ortega negó desde Costa Rica que estuviera impulsando un plan para derrocar a Chávez.

Reforma del Poder Judicial

La Asamblea de Venezuela aprobó la inclusión de otros doce funcionarios en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creado el 5 de noviembre de 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente, que había eliminado a la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa legal fue impulsada por el oficialismo en el marco de una reforma del Poder Judicial. El debate generó mucha polémica ya que la oposición creía que así el Poder Judicial quedaría subordinado a la Asamblea Nacional, que estaba dominada por una coalición de partidos proclives a Chávez. Desde el oficialismo se argumentó que se buscaba renovar el Poder Judicial para hacerlo más efectivo. Con la incorporación de los nuevos magistrados, el máximo tribunal del país, formado hasta ese momento por 20 miembros, contaría con 32, como lo exige la Ley Orgánica del TSJ vigente desde el 20 de mayo de 2004.

Referéndum revocatorio (agosto de 2004)

La Coordinadora Democrática, que aglutinaba a una heterogénea coalición opositora, se mostró optimista a lo largo de todo el proceso de recolección de firmas para solicitar el referéndum revocatorio del mandato del presidente Chávez –el Firmazo–, de cuatro días de duración, que se desarrolló con total normalidad. No obstante, la tensión creció cuando Chávez denunció públicamente un “megafraude”

que la oposición habría estado llevando adelante durante el propio proceso de recolección, mediante la manipulación y duplicación de las rúbricas y las presiones de empresarios a sus trabajadores para que apoyaran la convocatoria opositora. Por el contrario, la oposición denunció el “obstruccionismo” del gobierno.

Las dificultades de la oposición para lograr su objetivo pasaron por dos puntos fundamentales. Por un lado, la figura de Chávez había recuperado terreno en la estima popular en los últimos meses. Por otra parte, la Coordinadora Democrática parecía no haber encontrado una figura con el liderazgo suficiente para vencer a Chávez, en buena medida como consecuencia de su heterogénea conformación.

El resultado del referendo revocatorio realizado el 15 de agosto confirmó la permanencia de Chávez hasta el término de su mandato, a inicios de 2007. Aun bajo la mirada dudosa de muchos, Hugo Chávez había quedado reconfirmado al frente del gobierno venezolano y eran varios los interrogantes que se abrían.

La capacidad de las fuerzas opositoras quedó muy lejos de las expectativas generadas y la derrota fue contundente: con una amplia participación superior al 70 % del padrón electoral, el chavismo obtuvo alrededor del 59 % de los sufragios. La oposición manifestó sus dudas sobre el escrutinio, sobre el comportamiento de las empresas encargadas de implementar el voto electrónico y sobre los observadores internacionales pero en definitiva, significó la consolidación de Chávez en el poder.

Elecciones regionales (octubre de 2004)

Las elecciones celebradas el 31 de octubre se produjeron en un marco de cuestionamiento de algunos sectores sociales sobre la credibilidad e imparcialidad de la administración electoral, un importante nivel de abstención, potencial cambio en el sistema de partidos y una abierta polarización entre el oficialismo encabezado por el presidente Hugo Chávez y los grupos de la oposición, seriamente debilitados no sólo tras el resultado del Referendo Revocatorio Presidencial sino por los resultados.

En estos comicios se eligieron 22 gobernadores de estado y 332 alcaldes municipales, 229 diputados a los consejos legislativos estatales, así como las autoridades del Distrito Metropolitano de Caracas y del Distrito del Alto Apure. Según los resultados, el margen de abstención superó el 51 %, lo cual significó un retroceso significativo de la participación al compararla con los resultados del Referendo Revocatorio Presidencial, así como con los últimos comicios celebrados en Venezuela.

Resulta interesante destacar: 1) el fortalecimiento del partido oficialista Movimiento Quinta República (MVR) y, por supuesto, de su líder, Chávez Frías, quien creció en más de un 7 %; 2) la crisis de los partidos de oposición que hasta 1998 tuvieron un dominio en el sistema político: Acción Democrática, el Comité Organizativo Político Electoral Independiente (COPEI), el Movimiento al Socialismo (MAS), la Causa Radical, y Proyecto Venezuela (PRVZL); 3) el crecimiento y/o fortalecimiento de nuevas fuerzas políticas; el partido político regional Un Nuevo Tiempo (UNTC), el Movimiento Primero Justicia (MPJ) y, en menor cuantía, el más viejo, el partido Convergencia.

Por supuesto que la conclusión más importante fue la brecha surgida entre el oficialismo, que alcanzó un poco más del 43 % de los votos, y la fragmentación de los partidos de oposición, aún mayor que la presentada en las elecciones de 2000.

Política económica

En 2004 se mantuvo la expansión de la actividad económica iniciada en el tercer trimestre de 2003. El crecimiento fue del 17,9 % anual y permitió que la actividad se recuperara hasta alcanzar un nivel similar a los anteriores al paro generalizado de fines de 2002. El repunte abarcó prácticamente todos los sectores y su magnitud superó la estimada inicialmente. La agitada situación política del país se prolongó durante buena parte de 2004.

La expansión registrada en 2004 es el resultado de varios factores. En primer lugar, refleja la baja base de comparación que representó el primer trimestre de 2003. De hecho, la actividad se elevó un 35 % en el primer trimestre de 2004 en relación con el mismo período del año anterior. En segundo lugar, responde al impulso de las políticas económicas. Por último, refleja un tercer factor de carácter estadístico, esto es, el cambio de año base, de 1984 a 1997, de las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV). Una de las características importantes que resultan del análisis de las nuevas cuentas del país es la menor participación del sector petrolero en la economía. Este pasó de representar alrededor del 25 % del PIB a una cifra en torno al 18 %. Como las ramas de actividad más dinámicas en 2004 pertenecían, precisamente, al sector no petrolero, el cambio de la estructura de la economía amplifica su buen desempeño y, de manera análoga, atenúa el menor rendimiento del sector petrolero en términos del PIB.

Los efectos del importante repunte de la actividad económica se han traducido, en los mercados laborales, en una disminución del desempleo y, en menor medida, de la informalidad, así como en una recuperación de las remuneraciones reales, en particular las del sector público. A pesar de la significativa mejora de las importaciones, el superávit de la cuenta corriente en 2004 fue superior al de 2003, sobre todo gracias al alto precio del petróleo en los mercados internacionales.

La pobreza aumentó en un 10 % durante la gestión de Hugo Chávez. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas indicaban que el índice de pobreza subió de 42,8 % en el primer semestre de 1999, cuando el mandatario asumió el poder, a 53 % al cierre de 2004, mientras que la pobreza extrema creció en el mismo período del 16,6 al 25 %.

Libertad de expresión

En noviembre de 2004, un proyecto de ley que incrementaba el control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión amenazaba con vulnerar la libertad de expresión.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que “esta legislación amenaza severamente la libertad de prensa en Venezuela”.

El gobierno de Chávez había respetado ampliamente la libertad de prensa incluso frente a una ruidosa oposición que manejó grandes recursos. En efecto, como parte del debate, usualmente caliente y áspero, entre los partidarios del gobierno y la oposición, la prensa había podido expresar fuertes puntos de vista sin restricciones. Las empresas de televisión privada con frecuencia habían asumido una marcada posición opositora y sus noticias y programas de debate habían sido extremadamente hostiles al gobierno de Chávez. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos periodistas que trabajaban fundamentalmente para medios privados, simpatizantes de la oposición, fueron víctimas de agresiones e intimidación por parte de los partidarios del gobierno. Y, en menor grado, los periodistas que trabajaban para el principal medio estatal simpatizante del gobierno fueron también sujetos a actos de intimidación.

El presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, había expresado su preocupación porque la ley avanzaba en el Congreso y advertía sobre los peligros que encerraba, entre ellos, “que establece la censura previa gubernamental y discrecional, sin mediación judicial”, lo que dejaba a los medios sin defensa y vulneraba la libertad de prensa pero también, el derecho a la información que tiene todo ciudadano.

Política exterior

El no reconocimiento del gobierno interino en Haití culpando a los Estados Unidos por la deposición de Aristide, la propuesta de una Carta Social en el seno de la OEA, el avance en las negociaciones del diferendo territorial con Guyana y la inclusión en el esquema integracionista del Mercosur como miembro asociado fueron algunos de los temas abordados por el presidente Chávez en el marco de su política exterior.

Las relaciones colombo-venezolanas sufrieron importantes –aunque temporales– daños, en virtud de las diferencias recurrentes entre Bogotá y Caracas. Aun así, más allá de estas eventuales fricciones diplomáticas, Colombia sigue perfilándose como uno de los principales socios comerciales de Venezuela. En términos de una diplomacia formal, Chávez mostró su disposición para la búsqueda de una salida negociada al conflicto neogranadino, pese a su turbia cercanía a grupos insurgentes.

Venezuela procuró una mayor cercanía con Brasil en aras de estructurar un circuito de integración verdaderamente sólido. Venezuela ha establecido con los países de la cuenca del Caribe vínculos que se resumen en un suministro de combustible y alimentos bajo esquemas preferenciales.

Finalmente, en términos generales, la política exterior venezolana no favoreció ciertas políticas de integración en el ámbito sub-regional. Debe considerarse aquí el aminorado rol de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones y sus discrepancias respecto del ALCA como iniciativa hemisférica.